

NUEVA HISTORIA ARGENTINA

TOMO 9

VIOLENCIA, PROSCRIPCIÓN
Y AUTORITARISMO
(1955-1976)

Director de tomo: Daniel James

EDITORIAL SUDAMERICANA
BUENOS AIRES

James, Daniel

Violencia, proscripción y autoritarismo : 1955-1976. - 3ª ed. -
Buenos Aires : Sudamericana, 2007.
448 p. ; 24x17 cm. - (Nueva historia argentina; 9)

ISBN 950-07-2344-1

1. Historia Política Argentina I. Título
CDD 320.982

PRIMERA EDICIÓN

Junio de 2003

TERCERA EDICIÓN

Agosto de 2007

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en,
o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma
ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico,
por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito
de la editorial.

IMPRESO EN LA ARGENTINA

*Queda hecho el depósito
que previene la ley 11.723.*

© 2003, Editorial Sudamericana S.A.®,
Humberto I 531, Buenos Aires.

ISBN 10: 950-07-2344-1

ISBN 13: 978-950-07-2344-2

ISBN O.C.: 950-07-1385-3

www.sudamericanalibros.com.ar

VIII

*Protesta, rebelión y movilización:
de la resistencia a la lucha armada,
1955-1973*

por MÓNICA B. GORDILLO



May Day, Mexico City, Mexico, May 1969.



La “Revolución Libertadora”, que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, pretendía terminar con una forma de hacer política y diseñar un nuevo modelo de “república posible” basada en la participación de los partidos que habían conformado la oposición al gobierno. Sin embargo, aunque se sostuviera la democracia en un sentido formal, los sucesivos gobiernos adolecerían de una ilegitimidad esencial que llevaría a los marginados del sistema a la utilización de canales extraparlamentarios y a la creación de nuevas redes por donde exteriorizar la protesta. Así, comenzaron a definirse prácticas sociales de acción directa al estar vedada para el partido mayoritario la mediación política.

Una situación de casi pleno empleo creó, a su vez, condiciones más favorables para el éxito de las reivindicaciones. A ello se sumaron, como factores de movilización, la frustración política en amplios sectores y la influencia de los diferentes movimientos de liberación nacional que surgían en el mundo en el contexto de la Guerra Fría. En este sentido, puede marcarse como

rasgo dominante de todo el período la permanente recurrencia a la acción colectiva y a la exteriorización de la protesta, que adquirió diferentes formas y contenidos según los momentos históricos específicos. Esas diferencias tienen que ver con los *marcos culturales* que en cada momento encuadraron las acciones, es decir, con las representaciones simbólicas y las interpretaciones colectivas acerca de los acontecimientos que condicionaron los modos de acción y llevaron a la utilización de distintos repertorios de confrontación, según los actores sociales involucrados y las oportunidades políticas abiertas para la exteriorización de la protesta.

Se pueden discriminar tres etapas dentro de este período en las que se observa una base común: la de la inestabilidad política y su imposibilidad de legitimar un modelo económico y social alternativo al del peronismo.

- 1) Desde 1956 a 1969 predominaron la resistencia y la protesta obreras que, sin embargo, fueron tomando diferentes formas y contenidos al mismo tiempo que se iban conformando nuevos actores provenientes fundamentalmente de los sectores juveniles.
- 2) Entre 1969 y fines de 1970 se produjo un momento explosivo. En ese corto lapso emergió lo acumulado en los años previos, estallando la rebelión popular y conformándose movimientos sociales de oposición al régimen que ensayaron nuevos repertorios de confrontación.
- 3) En el período que va de 1971 a 1973 se produjo el pasaje a la acción política, que adoptó diferentes formas y vías de expresión según los actores involucrados y las alternativas políticas que cada uno sostenía.

Sin embargo, es necesario destacar que en este capítulo no serán tratados todos los momentos con la misma profundidad, ya que el propósito principal es explicar el pasaje a la movilización y acción colectiva que tuvo lugar a fines de los '60 y comienzos de los '70, que adquirió la forma de rebeliones populares, movimientos contestatarios o movimientos políticos para la toma del poder, alternativas todas que se fueron conformando en el período anterior; de ahí la necesidad de reconstruir la génesis de lo que luego saldría abiertamente a la superficie.

El hilo que subyace este período es la mudanza de una cultura política de resistencia a otra de confrontación, donde se ensayaron diferentes alternativas caracterizadas por su intención de excluir/eliminar al adversario, en algunos casos simbólica y en otros hasta físicamente.

DE LA RESISTENCIA A LAS REBELIONES POPULARES

La “pura resistencia”: los “gorilas”, los “caños”, la revolución...

El gobierno militar que se instaló en 1955 quebrantó momentáneamente la estructura legal dentro de la cual habían venido funcionando las organizaciones sindicales, a la vez que intentó aniquilar todo vestigio de la ideología peronista tal como se puso de manifiesto con el decreto 3.855 de 1956, que disolvía el partido, inhabilitaba para ocupar cargos públicos a todos los dirigentes políticos y gremiales que los hubieran ejercido durante los gobiernos peronistas y prohibía el uso de todos los símbolos peronistas, incluidas las canciones, distintivos y consignas hasta el extremo de no nombrar a Perón o a Eva Perón de manera pública o privada.

Pero, contrariamente al efecto buscado, esto produjo un refuerzo de la identidad peronista alimentado por discursos y tácticas violentos que llamaban a resistir hasta que se hiciese efectivo el esperado y seguro retorno de Perón desde el exilio. Comenzó así un período de reconstitución de la identidad popular peronista en circunstancias muy diferentes de aquellas en las que se había consolidado, donde se puso en juego un intenso trabajo de representación, autorreconocimiento, clasificación y distinción frente a los valores que se intentaba imponer desde los sectores dominantes. En efecto, la idea del retorno sirvió como elemento aglutinante para la resistencia popular ya que, a partir de ella, se conformó el mito del “avión negro”, que era sostenido tanto por los partidarios como por los temerosos enemigos.

El imaginario del retorno servía, entonces, para justificar por parte del gobierno medidas extremadamente represivas

como el fusilamiento del general Valle y de otros seguidores el 9 de junio de 1956, acusados de preparar un golpe con el objetivo de traer a Perón de nuevo al poder. Al mismo tiempo, este imaginario sirvió para alentar diferentes prácticas violentas. Al comienzo, ellas estaban desorganizadas y eran llevadas a cabo por partidarios y bases políticas que se dieron una débil organización de comandos, generalmente barriales y sin mucha coordinación. Algunos trabajadores comenzaron también a participar de esas prácticas, a la vez que intentaban reestructurarse internamente y ganar a través de nuevos dirigentes los diferentes sindicatos.

De la resistencia individual o más espontánea que predominó en la primera mitad de 1956 se pasó a otros repertorios de confrontación como el de la preparación y colocación de bombas, los famosos “caños”, que requerían mayor organización. Esta práctica se encuadraba dentro de un marco cultural típico de la resistencia que recomendaba la aniquilación del otro, del enemigo, pero de una manera solapada, encubierta.

Arturo Frondizi llegó al poder en 1958 con el apoyo del voto peronista tras haber “pactado” con Perón el levantamiento de la proscripción y el restablecimiento de la legislación laboral que había sido dejada sin efecto durante el gobierno de la Revolución Libertadora. La etapa que se inició con Frondizi fue entonces de gran expectativa. Pero, luego del apoyo inicial al cumplir éste su promesa de restablecer la legislación laboral peronista, comenzaron a vislumbrarse signos negativos que llevaron a desvanecer el optimismo de



Entrada del frigorífico Lisandro de la Torre el día de su ocupación por los obreros, enero de 1959.



Frigorífico Lisandro de la Torre ocupado por sus obreros, 19-1-1959.

los trabajadores y a restablecer algunas prácticas de la etapa anterior, aunque ahora organizadas con mayor participación obrera al haberse reconstituido los sindicatos.

Un ejemplo importante de la acción obrera/sindical en esta etapa fue la huelga y ocupación del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre en enero de 1959. La operación militar de desalojo por dos mil soldados y cuatro tanques dio un saldo de 95 obreros detenidos, varios heridos y cinco mil cesantes. En el barrio de Mataderos la lucha se prolongó por varios días. Ante la continuación del conflicto los sindicatos y organizaciones gremiales peronistas como las 62 Organizaciones, que habían decretado un paro nacional, comenzaron a argumentar que se estaban creando las condiciones para un nuevo golpe y decidieron levantar el paro. Durante todo el gobierno de Frondizi se percibía esta tensión entre una combatividad obrera dirigida contra las medidas económicas y sociales del gobierno y el deseo de parte de las organizaciones sindicales de mantener las posiciones logradas. Al fin el sector mayoritario dentro del sindicalismo no estaba dispuesto a dejar de ser un

importante grupo de presión dentro del sistema establecido, un “factor de poder” con miras a recobrar el poder político cuando fuera oportuno.

Con relación a los marcos culturales que se conformaron en el período, puede considerarse que hacia fines de los '50 comenzaron a manifestarse los primeros indicios de una cultura contestataria que, nutrida de diferentes vertientes e imaginarios comunes, apostaba a la acción directa y adoptaba diversas formas según los actores y momentos específicos, hasta llegar luego en algunos sectores juveniles a posiciones insurreccionales. Una serie de factores se conjugaron para ello: la proscripción del peronismo, el exilio de Perón y la consiguiente inestabilidad del sistema político, la insatisfacción de los sectores intelectuales que habían apoyado la propuesta de Frondizi y luego se sintieron desilusionados. Hay que destacar también las influencias de los movimientos de liberación desarrollados en diferentes lugares del mundo, que tornaban posibles las salidas revolucionarias; la difusión del existencialismo, que encontró también amplia recepción con su “moral de las manos sucias”, y del compromiso en la acción, factores todos que llevaron a una reconsideración del peronismo y sus potencialidades.

A pesar de las profundas divisiones, la coyuntura nacional e internacional permitió a su vez afirmar con fuerza imaginarios comunes entre distintos sectores —tanto peronistas como no peronistas— que crearon los marcos para la acción. Un lugar común fue la aceptación de la necesidad del cambio de estructuras: se necesitaba modificar la estructura política, la frágil “democracia burguesa” que mantenía marginada a la fuerza política mayoritaria, contribuyendo con ello a perder confianza en el sistema democrático-representativo. También se puso énfasis sobre la necesidad de cambiar la estructura económica y social imponiendo un sistema donde los sectores populares participaran efectivamente en el gobierno. Esto encajaba directamente con otro imaginario común en la época, tanto de la izquierda como del nacionalismo de derecha, el de luchar contra el imperialismo personificado en los monopolios y en las grandes empresas extranjeras radicadas en el país, en especial a partir de 1955.

De este modo, afirmando un fuerte componente del peronis-

mo pero no exclusivo de él, en la década del 60 se afianzó el nacionalismo aunque con diferentes signos y objetivos según los sectores que lo sostuvieran, relacionado también con la idea de la “liberación nacional”. En efecto, en el discurso de distintos sectores se hacía referencia a ella, por lo general, con un doble sentido. Por un lado era la lucha contra el imperialismo, por una nación independiente encuadrada dentro de los países del Tercer Mundo, por una efectiva soberanía en sus relaciones con los demás países. Al mismo tiempo, implicaba la necesidad de afirmar el respeto y el bienestar de los sectores populares frente a los privilegiados, “los invasores y ocupantes internos”.

En el discurso peronista de la resistencia aparecen fuertes componentes de un lenguaje militarista que aludía permanentemente a la situación del país como la de un “territorio ocupado” y a los distintos gobiernos como representantes del “ejército de ocupación”. Entonces, la lucha contra esos gobiernos aparecía legitimada porque se estaba luchando por la patria y por liberarla de los invasores. De ahí el paso a la justificación de cualquier método de acción, incluida la vía armada, aparecía entre algunos sectores como un corolario lógico. Sin embargo, si bien la situación creada hacia fines de los '50 y comienzos de los '60 fue dibujando los primeros esbozos de esas alternativas, éstas —alentadas también como un efecto rebote de la Revolución Cubana— ocupaban todavía un lugar muy marginal.

Las divisiones planteadas dentro del peronismo se pusieron tempranamente en evidencia entre quienes querían mantener una línea de intransigencia y profundizar los contenidos revolucionarios y los que, una vez abierto el juego político con las elecciones de 1958, intentaron posicionarse dentro del sistema. Entre los primeros se destaca la línea de los “duros”, que reconocían el liderazgo de quien fue el primer delegado de Perón, John William Cooke. Después que Perón privilegió la táctica de apoyar a Frondizi, la importancia del sector más intransigente dentro del movimiento comenzó a declinar y con él también la figura de Cooke, a pesar de sus intentos por volver a recuperar protagonismo en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre tratando de darle a ésta el carácter de huelga general insurreccional.



Juan Domingo Perón con John W. Cooke en la República Dominicana.

Una vez fracasadas y endurecidas las relaciones con el gobierno, Cooke alentó y participó en el primer intento de acción alternativa, el de la guerrilla rural peronista dirigida por el comandante Usturunco en Tucumán, entre septiembre de 1959 y enero de 1960. A mediados de ese año se había descubierto también otra célula guerrillera en la zona boscosa del límite con Catamarca, con un saldo de seis detenidos del autotitulado “Ejército de Liberación Nacional”, que pa-

recía tener conexiones importantes con Cuba. Estas agrupaciones, aunque minúsculas todavía, harían apariciones esporádicas en este período, marcando la temprana utilización de la táctica de la lucha armada para canalizar la insatisfacción de algunos sectores que, posteriormente, tomaría otras dimensiones.

La experiencia de la Revolución Cubana impactó también de lleno en el seno de la intelectualidad y de la izquierda no peronista. En ese sentido, el nacionalismo comenzó también a constituir un componente muy fuerte de la “nueva izquierda”, caracterizada por el alejamiento progresivo del marxismo ortodoxo como consecuencia de los profundos debates ideológicos generados por el enfrentamiento ruso-chino. Así, en líneas generales, las distintas agrupaciones de izquierda fueron definiéndose en torno a dos grandes ejes o líneas: la del Partido Comunista, que continuaba fiel a la Unión Soviética y había optado por la “vía pacífica al comunismo”, y la otra, que veía con simpatía los modelos cubano y chino y escogía la vía de la revolución como medio para llegar al poder.

Esa revolución —que según el modelo cubano— debía ser

continental y socialista sólo podía llevarse a cabo a través de la lucha armada, tema que se convirtió en el punto medular del enfrentamiento de Cuba con las organizaciones comunistas latinoamericanas y también con la Unión Soviética. A su vez, la alianza entre los intelectuales y los sectores campesinos era el supuesto básico de la teoría del “foco”, táctica que intentó Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, por considerar que era el campesinado rural y no la clase obrera urbana el sector de la sociedad con mayor potencial revolucionario. Estos planteos, que atacaban frontalmente la ortodoxia marxista, intentaron tener en la Argentina una aplicación práctica cuando, con intervención del servicio de inteligencia cubana, se organizó en 1962 el foco de Salta dirigido por Ricardo Massetti, que pronto fue descubierto y desarmado. Fue así que luego de 1959 comenzaron a proliferar infinidad de agrupaciones constituidas fundamentalmente por jóvenes que trataban de fijar posiciones coherentes con los cambios que a nivel mundial y nacional se estaban operando.

En 1963 una nueva etapa se abrió en el país. Los militares,



Incendio de ómnibus en Pavón y Matheu, 1963.

después de derrocar a Frondizi en 1962 e instalar el gobierno interino de Guido, habían acordado la salida electoral aunque manteniendo la proscripción del partido peronista para las elecciones presidenciales y de gobernadores, lo que hizo posible el triunfo de la fórmula compuesta por Arturo Illia-Carlos Perette de la Unión Cívica Radical del Pueblo y con ello también se modificaría la estructura de las oportunidades políticas para la manifestación de la protesta.

El movimiento obrero como factor de poder

En efecto, la legitimidad de un gobierno que no representaba la voluntad mayoritaria, pues los votos en blanco en la elección presidencial de 1963 superaron las cifras alcanzadas por el partido triunfante, aparecía claramente cuestionada y creaba la necesidad por parte del gobierno de atraer al movimiento obrero con el fin de hacer posibles la recuperación y la estabilidad económica tras la crisis desatada el año anterior. Esto implicaba aceptar la apertura de ciertos canales por donde se pudieran expresar las reivindicaciones de un movimiento obrero que ya había recuperado su estructura sindical y los mecanismos de negociación colectiva. Pero, a su vez, la misma debilidad del gobierno y la cuestión pendiente de la proscripción del peronismo llevaron al movimiento obrero a buscar y encontrar fácilmente aliados influyentes para hacer efectivas sus demandas. Esa situación lo convirtió en un verdadero factor de poder, en protagonista principal y en la “columna vertebral” del movimiento peronista, eclipsando al ala política.

En esta etapa se superó el espontaneísmo que lo había caracterizado y el movimiento obrero organizado se convirtió en el actor principal que, si bien alentó la movilización, también recurrió a medidas de fuerza estrictamente planificadas tendientes a reforzar la disciplina sindical y la verticalidad y a frenar los movimientos de base. En líneas generales puede decirse que realizó una intensa actividad para instalar sus demandas en la esfera pública y para ocupar un espacio fundamental en el escenario político.

El repertorio de acciones utilizadas fue paradigmático de la forma que adoptó la acción colectiva: los planes de lucha de

la CGT, que incluyeron marchas al Congreso, movilizaciones en caravanas, ocupaciones de fábricas, cabildos abiertos, ridiculización del oponente, actos conmemorativos, entre otras medidas. Estos planes fueron llevados a cabo entre mayo de 1963 y el fin de 1964 (véase el capítulo III).

Otra variante de protesta, que, en realidad, aparecía como una forma política de resistencia encubierta o como un lenguaje escondido, fue la lucha por el control de la memoria tratando de ofrecer una visión alternativa del pasado. Ésta adoptaba la forma de rituales de recordación de las fechas más importantes del peronismo; por ejemplo, el 17 de octubre o “Día de la Lealtad”, cuya celebración pública había sido sistemáticamente prohibida desde 1955, o la del nacimiento o la muerte de Evita. Recién en 1963, a pocos días de asumido el gobierno de Illia, se permitió celebrarlas con actos públicos que incluyeron —en el caso del 17 de octubre— caravanas de motocicletas en distintos barrios, lanzamientos de bombas de estruendo y conmemoraciones en distintas plazas y puntos del país. En 1964 los actos presentaron similares características, con un lenguaje moderado que planteaba levantar las banderas de la “pacificación social”, de la “unidad nacional” y de la “felicidad para todo el pueblo”, que traería la redención argentina: el regreso del general Perón. Esto se relaciona con el intenso trabajo de representación desarrollado en el período para reafirmar la ortodoxia peronista, en el sentido de reafirmar los valores fundacionales del peronismo, frente a la heterodoxia que aparecía representada tanto en las diferentes vertientes de izquierda que estaban surgiendo como en los que querían romper con la verticalidad característica del movimiento. En ese sentido y como un contradiscurso de clase, se reforzaron los imaginarios criollistas que trataban de ligar las luchas llevadas a cabo por los obreros y sectores populares con las de los gauchos y montoneras en el pasado.

El año 1965 terminó con el cierre relativo de los canales de comunicación con el gobierno de Illia y, con ello, se fue creando el marco para alentar diversas alternativas: por un lado, la incorporación autónoma del movimiento obrero dentro del sistema político, ya fuera como un partido o una representación corporativa; por otro, una salida revolucionaria de izquierda —minoritaria todavía— y, finalmente, una salida autoritaria,

apoyada por los principales dirigentes sindicales que de alguna manera acordaron mantener los mecanismos para la presión corporativa, principal fuente de su poder, que se concretó el 28 de junio de 1966 cuando el general Onganía destituyó al presidente Illia.

Los sectores juveniles asumen compromisos

Otro actor que cobró fuerza fue el sector estudiantil, que supo aprovechar también el cambio operado en la estructura de las oportunidades políticas para expresar su protesta, asumiendo fundamentalmente una actitud de compromiso y solidaridad con los problemas que se vivían en el país y en el mundo. Esto fue posible porque con el gobierno de Illia funcionaron normalmente los canales para la participación en la actividad universitaria. En ese período se pusieron en práctica los presupuestos de la Reforma Universitaria, funcionando el gobierno tripartito, la provisión de cargos por concurso, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, al igual que los centros de estudiantes. En ese contexto, la principal reivindicación específica se concentró en un aumento del presupuesto universitario que en algunos momentos culminó en la toma de facultades en las principales universidades nacionales.

Pero la preocupación principal de los estudiantes comenzó a vincularse con la inscripción de su lucha dentro de otra más general que estaba librando sobre todo el movimiento obrero, donde comenzó a percibirse que, a pesar de la legalidad formal mantenida por el gobierno, éste carecía de representatividad y que por lo tanto era necesario apoyar las luchas populares, acompañando y orientando su dirección. Fue así como secundaron los planes de lucha de la CGT haciendo suyos muchos de sus puntos principales y, aunque no fue coordinado con los dirigentes sindicales, durante la etapa de la ocupación de fábricas también los estudiantes procedieron a la toma de las facultades como una muestra de solidaridad. En el mismo sentido tuvieron una intensa participación en los “cabildos abiertos” de 1964. En octubre de ese año se registró una serie de conflictos en distintas universidades, que culminaron con ocupaciones en La Plata, Posadas, Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Como puede apreciarse, la adhesión estudiantil a los obreros empezó a manifestarse con anterioridad al golpe de 1966. En Córdoba, por ejemplo, los estudiantes apoyaron casi todas las medidas de fuerza de uno de sus principales sindicatos, el SMATA. Éste nucleaba a los trabajadores de la industria automotriz, principal actividad económica de la ciudad, y así, los distintos centros de estudiantes salieron a la calle para demostrar su solidaridad participando en las marchas y movilizaciones que el SMATA realizó en el mes de mayo de 1966, ante la amenaza de ver reducidas sus jornadas de trabajo. Más tarde será el movimiento estudiantil uno de los primeros en reaccionar frente al gobierno de Onganía y en esa actitud tuvo tanto que ver el ataque perpetrado contra la autonomía universitaria como la experiencia previa de movilización y participación adquirida durante los años del gobierno de Illia.

Otra forma de acción era la desplegada por grupos, minoritarios todavía, que, recogiendo la experiencia de la resistencia, intentaron fortalecer la alternativa insurreccional. En esta línea se inscribieron tanto vertientes que provenían del peronismo como otras que se fueron desprendiendo de los partidos de izquierda, conformando las distintas variantes de la conocida como “nueva izquierda”. A comienzos de 1964 se detuvo a una célula definida como castrista en Orán (Salta) que, según se dijo, habría estado recibiendo entrenamiento militar. De los siete detenidos, tres residían en Córdoba y trabajaban en el comedor de la Federación Universitaria; luego se procedió a detener también a otro grupo con similares características en Icho Cruz, provincia de Córdoba. Estos hechos anticipan el papel fundamental que cumpliría esta ciudad hacia el final de la década, por confluir en ella un importante movimiento obrero, autónomo y combativo, un movimiento estudiantil comprometido en las luchas populares y sectores políticos cada vez más radicalizados.

Las cúpulas sindicales pierden poder: ¿cómo enfrentar a la dictadura?

Frente a la nueva coyuntura autoritaria creada por el golpe militar de junio 1966, ¿cómo se canalizó la acción colectiva?

Como reacción a las medidas del gobierno que trataban de limitar la autonomía de las universidades nacionales, las primeras reacciones provinieron del ámbito universitario y fueron protagonizadas por los estudiantes y algunos docentes que se manifestaron en contra de esas decisiones, llevando a cabo diferentes manifestaciones de repudio que tuvieron como resultado la intervención de casi todas las universidades. Una acción de mucha importancia por la dimensión trágica que adquirió y que aparece como un ejemplo de otras tantas que tuvieron lugar en otros puntos del país fue la que se registró en Córdoba en la segunda semana de septiembre y que la memoria popular computa como la primera víctima de la dictadura. Las principales agrupaciones estudiantiles habían decretado un paro para el 22 de agosto y estudiantes de la Agrupación Universitaria Integralista iniciaron una huelga de hambre en la puerta de la iglesia Cristo Obrero. Los disturbios continuaron con la toma del barrio Clínicas en la primera semana de septiembre, donde la participación no quedó limitada a los estudiantes sino que se amplió a los vecinos que contribuyeron a levantar barricadas. El 7 de septiembre, el estudiante de segundo año de Ingeniería y subdelegado en un departamento de la planta automotriz de IKA, Santiago Pampillón, fue herido de bala en el cráneo cuando participaba en una manifestación callejera, falleciendo cinco días más tarde. El hecho provocó gran conmoción por reunirse además en Pampillón la doble condición de estudiante-trabajador, por lo que la CGT Córdoba resolvió repudiar la agresión policial contra el estudiantado, disponiendo la realización de un paro general de una hora por turno y de un acto frente a la CGT para reclamar el cese de la violencia represiva y reafirmar el principio de una universidad abierta al pueblo. Luego de haber vivido la experiencia participativa que tuvo lugar durante el gobierno de Illia, el autoritarismo de Onganía impactó profundamente en los sectores estudiantiles que lo vivieron como un cercenamiento a las prácticas anteriores.

Fue así, y sobre todo luego de la conformación de la CGT de los Argentinos y el impacto del mayo francés durante 1968, que en las agrupaciones universitarias se abrió también un debate interno profundo en torno a la alternativa de reforma o revolución. A partir de la lucha por la recuperación de los cen-

Un sindicalismo de oposición

“La CGT de los Argentinos, la rebelde, la que carece de todos los recursos, exhorta también a todos los trabajadores de la Patria a no consentir más a los profesionales de la mentira y la intimidación. Hay una sola CGT histórica, es la de los trabajadores, la del pueblo, la de todos los argentinos. Es la CGT de los idealistas, la de los que quieren el triunfo de los valores verdaderamente humanos (...) Porque los otros, que se titulan sindicalistas y tienen autos de lujo, no pueden entender a las madres de Tucumán; los coleccionistas de cuadros y de perros no saben lo que es estar desocupado y cuyo único cuadro es la desesperación (...)”

Fuente: “CGT con la Patria y el Pueblo Argentino”, en *Informe DIL*, Nº 98, abril de 1968, p. 25.

tros de estudiantes, iniciada luego de 1966, comenzó a perfilarse la necesidad de un cambio del sistema y de la unidad con el resto de los sectores populares. Además, empezaron a proliferar agrupaciones estudiantiles que aparecían como núcleos de organizaciones políticas que trabajaban también en otros ámbitos, pues para entonces la lucha sólo circunscripta al ámbito universitario había comenzado a perder sentido. La tendencia general apuntó a no luchar sólo por el cogobierno sino directamente por la revolución, a la que se llegaría por diferentes vías pero que era vista como meta de casi todas las agrupaciones.

Es importante destacar que la CGT de los Argentinos comenzó a promover nuevas formas de protesta y de resolución de los conflictos que, en contraposición a la férrea disciplina y verticalidad que había caracterizado la representación del orden sostenida por las anteriores autoridades sindicales, apuntaban a la descentralización para jerarquizar el papel de las regionales y permitir una real participación y expresión de las bases. Esta situación llevó a que, incluso, varias seccionales se pronunciaran en contra de las decisiones adoptadas por sus dirigencias nacionales, como fue el caso en Córdoba del Sindicato de Luz y Fuerza, dirigido por Agustín Tosco y uno de los

principales bastiones de la CGT de los Argentinos. Además, esta central reforzó la vinculación con los estudiantes a través de la realización conjunta de una serie de actividades, tales como conferencias, mesas redondas y peñas.

El discurso de la CGT de los Argentinos alentó también la acción del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Este movimiento tuvo su punto de partida en el "*Mensaje de los 18 obispos para el Tercer Mundo*", que, con la dirección del obispo brasileño Helder Cámara, fue lanzado el 15 de agosto de 1967. En nuestro país 270 sacerdotes que adhirieron al mensaje realizaron su primer encuentro en Córdoba los días 1° y 2 de mayo de 1968. Este suceso marca el nacimiento formal del tercermundismo en el país. El compromiso de estos grupos cristianos frente a la sociedad los llevaba a luchar contra todo lo que oprimiera al hombre; de ahí que reaccionaran frente a las políticas autoritarias, y en su discurso comenzó a reforzarse la idea de la liberación nacional, entendida como

una lucha contra el capitalismo y los imperialismos.

En Tucumán algunos sacerdotes habían apoyado las marchas de hambre y ollas populares que se organizaron como consecuencia de los cierres y reestructuraciones de ingenios. La mayoría de ellos se sumó inmediatamente al movimiento (véase el capítulo IV). Córdoba se convirtió en uno de los principales centros urbanos donde los "sacerdotes del Tercer Mundo" comenzaron a desarrollar una intensa actividad en los barrios obreros y marginales. Esta acción no se limitaba a la mera prédica pastoral sino que buscaba un contacto más estrecho con los sectores desposeídos a través de la participación en acti-



Agustín Tosco.

vidades comunes. De esta manera, se fueron creando lazos muy fuertes de solidaridad y compromiso y se robustecía la idea de la necesidad de participación colectiva.

Esto último nos acerca a otro de los fenómenos que el autoritarismo de la Revolución Argentina y el ejemplo de otros países latinoamericanos terminaron de dar forma: la conformación del brazo armado en apoyo a la acción política en algunas agrupaciones de izquierda. Se ha mostrado que algunas células guerrilleras comenzaron a organizarse tempranamente. Sin embargo, sería recién a partir de 1967, cuando el gobierno de Onganía definió claramente su política y la acción armada empezó a tomar cuerpo entre algunos sectores como la única estrategia posible. Esta prédica, sumada al sindicalismo combativo liderado por Ongaro, llevó a los sectores del peronismo que habían apoyado la línea de Cooke a organizar su propio brazo armado, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), que en septiembre de 1968 realizaron sus primeras acciones en la localidad tucumana de Taco Ralo. Este intento fue rápidamente desarticulado por las fuerzas de seguridad que detuvieron a varios de sus integrantes y desarmaron el “destacamento guerrillero 17 de octubre”.

Dentro de las agrupaciones de izquierda no peronistas, la acción del gobierno de Onganía precipitó también las definiciones. Así, por ejemplo, en 1967 un desprendimiento del Partido Comunista constituyó el PC-CNRR (Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria), luego Partido Comunista Revolucionario (PCR). También ese año se constituyó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo objetivo era confluir con las fuerzas del “Che” Guevara en Bolivia. En 1968 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) realizó su cuarto congreso que desembocó en la división y formación de dos corrientes: PRT “El Combatiente”, conducido por Mario Roberto Santucho, que al año siguiente dio nacimiento al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y PRT “La Verdad”, conducido por Nahuel Moreno, que luego confluiría en el Partido Socialista de los Trabajadores. Para entonces también se organizaron las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), a partir de grupos de militantes del PCR, que fueron los que realizaron la primera acción de guerrilla urbana el 5 de abril de 1969 al atacar un vivac perteneciente al

Regimiento I de Infantería Motorizada de Patricios en Campo de Mayo.

Estos hechos demuestran que la elección de la vía revolucionaria para la toma del poder estaba ya consolidada entre algunos sectores. Era sin embargo necesario encontrar la oportunidad, desde este punto de vista crear las “condiciones objetivas”, para poder concretar con éxito ese propósito. En este sentido puede decirse que el gobierno de Onganía actuó como el precipitador, como el momento en el que se dieron las condiciones para la construcción de una percepción de injusticia, que es necesaria para el pasaje a la acción. Pero eso solo no bastaba, hacía falta que la percepción individual o sectorial fuera encuadrada colectivamente. Las acciones y representaciones contra la dictadura, construidas por la CGT de los Argentinos y por los otros sectores, actuaron en ese sentido. Pero, a pesar del discurso más confrontacionista de estos sectores, el pasaje a la acción no se concretó mientras la mayoría del movimiento obrero creyó que podrían encontrarse canales para la negociación o para un cambio de actitud por parte del gobierno, que había prometido restablecer el mecanismo de la concertación para fines de 1968. Tendrían que aparecer detonantes que convirtieran la percepción de injusticia sectorial en injusticia colectiva para fortalecer una identidad común, otro de los componentes necesarios para la acción, un “nosotros” como totalidad, como “pueblo afectado”, contra un “ellos”, el “régimen opresor”. Esto ocurriría a comienzos de 1969.

LAS NUEVAS FORMAS DE LA PROTESTA OBRERA Y LA REBELIÓN POPULAR

El año 1969 marcó el inicio de la descomposición del régimen de la Revolución Argentina. Diferentes circunstancias se conjugaron para transformar la protesta obrera en rebelión popular y poner en escena nuevos repertorios de confrontación que adquirieron ese año la modalidad de insurrecciones urbanas; de ellas se destacan dos fundamentales y paradigmáticas: el Cordobazo y el Rosariazo.

Desde comienzos de año los ánimos comenzaron a caldearse en el sector obrero. El prometido restablecimiento del meca-

nismo de las convenciones colectivas para diciembre de 1968 no se concretó, lo que motivó una serie de manifestaciones de protesta. En ese marco general de descontento obrero, comenzaron a registrarse diferentes expresiones de conflictos surgidos de anteriores medidas del gobierno. Así, por ejemplo, en marzo se llevó a cabo una marcha desde el ingenio Bella Vista hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán, encabezada por su cura párroco, para solicitar que se pagaran los jornales adeudados a los trabajadores. Al no encontrarse soluciones, en el mes de abril continuaron las movilizaciones encabezadas también por sacerdotes y delegaciones obreras, ante la grave situación de diez ingenios cerrados y la provincia vigilada por tropas de infantería y de la Policía Federal. A esas manifestaciones se sumó también una huelga de hambre realizada por doce estudiantes universitarios en la parroquia San Pío X en la ciudad de San Miguel de Tucumán. También en localidades del norte de Santa Fe se organizaron “marchas de hambre” desde Villa Ocampo, Villa Guillermina y otras, teniendo como meta final la capital provincial, con el objetivo de entrevistarse con el gobernador para petitionar el mantenimiento de fuentes de trabajo, tales como los talleres de reparación del ferrocarril en Villa Ocampo.

La mística del Cordobazo

“(...) El Cordobazo se convirtió en una figura romántica que estaba presente en todos los hechos, determinó una mística muy fuerte (...) que después va a determinar el holocausto de sangre de los sectores estudiantiles que iban a la muerte, también a matar, es cierto. Comienza a ser la idea romántica de la conciencia de la clase. En la conciencia individual de todos los que estábamos viviendo ese proceso, se viene a asentar: acá está lo que quiere la gente (...) Yo creo que el Cordobazo acelera eso, le pone plazos perentorios, ya no se podía demorar nada más y se aventuran, se sale a cosas increíbles, a acciones en que se arriesgaba todo, no sólo a nivel personal, sino que se arriesgaba todo como organización, y ahí podía desaparecer el grupo... hay una urgencia, una precipitación (...)”

Fuente: Testimonio de Luis, dirigente estudiantil en esa época.

El descontento popular fue creciendo y conformando algunos puntos neurálgicos en el interior del país. Tal fue el caso de Córdoba, que pasó a convertirse en el eje de la actividad de distintos sectores sociales. Desde el punto de vista político-sindical las tendencias más combativas habían encontrado allí un centro importante de apoyo. Esto se debió a las características de los sindicatos líderes de Córdoba que, desde fines de la década del 50 y como consecuencia de la radicación de Fiat e IKA, primeras fábricas automotrices instaladas en el país, fueron construyendo una particular tradición sindical. Ésta se caracterizó por su autonomía frente a las cúpulas sindicales nacionales, por su permanente recurrencia a las medidas de acción directa y por una fuerte conciencia sindical. Así, aunque el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) de Córdoba integraba una estructura sindical centralizada, de hecho disfrutaba de mucha independencia debido en gran parte al carácter descentralizado de los convenios colectivos en la industria automotriz. Ese procedimiento les permitía a las compañías automotrices multinacionales manejar un mercado inestable pero, al mismo tiempo, tornaba a los sindicatos del sector más dependientes del apoyo de sus bases para demostrar su poder, a la vez que exigía que su dirigencia estuviese más comprometida con las exigencias de éstas. Otro de los sindicatos líderes del período, Luz y Fuerza, gozaba también de gran autonomía por formar parte de una estructura gremial federativa que le permitía ejercer un control prácticamente completo sobre su presupuesto, así como sobre los convenios colectivos y servicios sociales. Además, la presencia singular durante esos años de su secretario general —Agustín Tosco—, dirigente de gran prestigio y profundas convicciones democráticas, fortaleció la práctica de una democracia sindical participativa y el establecimiento de una conducción sumamente sensible a las demandas de las bases.

Otras manifestaciones sociales y políticas también encontraron su lugar de expresión en Córdoba. El 11 y el 12 de enero los sectores militantes del movimiento sindical peronista y el ala política del peronismo revolucionario se reunieron en la localidad cordobesa de Unquillo para planear la siguiente etapa de lucha. A mediados de marzo, en los barrios populares de Bella Vista y Comercial se realizaron una serie de asambleas en los

centros parroquiales para protestar por el cierre de 130 centros de alfabetización de adultos que beneficiaban a 6.900 alumnos y se decidió continuar dictando clases en esos centros, al igual que en los que funcionaban en las cárceles. Influenciada por la situación imperante, la Delegación Regional de la CGT emitió un documento, la llamada “Declaración de Córdoba”, que exhortaba a la formación de un frente civil de oposición al régimen.

Ese mismo mes, el nuevo gobernador de Córdoba, Carlos Caballero, presentó un proyecto que pretendía crear un esquema corporativo, el Consejo Asesor Económico. A esto se sumó el aumento de los impuestos municipales y a la propiedad, que agravó el malestar de la clase media, profundamente afectada por la falta de libertades democráticas. Esas circunstancias fueron acrecentando la sensación de injusticia a la que se agregó el descontento existente entre los obreros y los estudiantes, que encontraron detonantes para la expresión del conflicto a comienzos de mayo. El 6 de ese mes, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) convocó a un paro de 24 horas para protestar contra el irresuelto problema de las “quitas zonales”, sistema por el cual los trabajadores de Córdoba cobraban menos que sus pares de Buenos Aires. El día 12, el gobierno nacional abolió el “sábado inglés”, establecido por una ley provincial de 1932 que otorgaba a los trabajadores de Córdoba el pago de una jornada completa los días sábados, en vez de la jornada real que era de cuatro horas. Esto llevó a una multitudinaria asamblea del SMATA que fue disuelta por la policía con el consiguiente enfrentamiento violento; esos actos fueron un ensayo general del Cordobazo, ya que ese día los trabajadores mecánicos consiguieron controlar el centro de la ciudad durante varias horas.

Las movilizaciones obreras coincidieron con la agitación de los estudiantes en todo el país, especialmente en las provincias. El 15 de mayo, en el marco de acciones de protesta por el cierre del comedor estudiantil, fue asesinado en Corrientes el estudiante de Medicina Juan José Cabral; luego, con las muertes de Adolfo Bello y Luis Norberto Blanco en Rosario, cuando participaban en la manifestación de repudio por lo sucedido en Corrientes, comenzó lo que algunos llamaron la “semana rabiosa”. A partir de ese momento los hechos se precipitaron uno tras otro: la marcha del silencio en Rosario y el paro general decretado por la Delegación Rosario para el 23 de mayo en

repudio por los actos de represión y muerte de los estudiantes, que produjeron varios enfrentamientos callejeros con la policía protagonizados especialmente por estudiantes. Este hecho fue denominado el “primer Rosariazo”. El 26 de mayo el barrio Clínicas de Córdoba, donde la mayoría de los residentes eran estudiantes, fue ocupado y, al día siguiente, Ongaro fue detenido al llegar en tren a Córdoba.

Mientras tanto las delegaciones del interior comenzaron a presionar a las dos centrales nacionales para que decretaran un paro nacional ante la grave situación que se estaba viviendo. Con tal motivo, el 26 de mayo tanto la CGT Azopardo como la de los Argentinos decidieron decretar un paro general en todo el país por 24 horas para el día viernes 30 de mayo. En Córdoba, los representantes de las dos CGT decidieron, en cambio, que fuera de 48 horas y adelantarlo al día 29 para remarcar la especial situación de descontento existente allí; además se decidió darle el carácter de “paro activo”, es decir, hacer abandono de los lugares de trabajo a partir de las 10 para movilizarse al centro y expresar su protesta.

El Cordobazo: los acontecimientos

El abandono de las grandes plantas industriales, que comenzó a las diez de la mañana del 29 de mayo, fue masivo. Así, desde los cuatro puntos de la ciudad comenzaron a marchar hacia el centro los trabajadores de IKA-Renault, Transax, Thompson Ramco, ILASA, División Planta Matrices (Perdriel), Fiat y de las numerosas empresas metalúrgicas y de otro tipo dispersas por la ciudad. Lo mismo ocurrió con los trabajadores públicos y de las distintas dependencias de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), donde el acatamiento a la medida fue total. Durante su paso, trabajadores de otras plantas, estudiantes y ciudadanos en general se sumaron a la marcha, hasta que la columna principal que venía desde la fábrica de IKA-Renault en Santa Isabel fue dispersada hacia los barrios adyacentes luego del primer enfrentamiento con la policía. Casi al llegar al centro en su marcha hacia el local de la CGT, la policía abrió fuego y mató al obrero de IKA-Renault Máximo Mena. Los trabajadores atacaron enton-

La lucha en las calles

“(...) Veíamos venir los caballos, así que ¡¡a correr todo el mundo para arriba!! Pero en el grupo había un muchacho, no sé si era de Luz y Fuerza, entonces cuando toda la manifestación corre, este hombre se queda y enfrenta a la policía montada con un palo. Entonces eso hace que la gente se vuelva, que los incentive y por supuesto, con los elementos que tenían en la mano, a los pedradones a la policía. Este acto heroico de ese tipo fue el motor. Fue la primera vez que vi caballos de la policía de espalda, disparar por la Maipú abajo; siempre los había visto de frente. El haber visto la retirada por primera vez dio fuerza y entonces la gente se reagrupa y seguimos (...) Vienen dos o tres patrulleros, se bajan con una confianza bárbara —se ve que no sabían cómo venía la mano—, pero ya estaba la guerra desatada, había que defender lugares y entonces ahí vi no a caballos sino a policías corriendo a buscar los patrulleros. Lo agarraron a uno y le rompieron la camisa y al casco lo traían como una bandera, como símbolo. Se tomó la esquina y se la cerramos (...)”

Fuente: Testimonio de Omar, estudiante.

ces al cordón policial desbandándolo, transformándose la movilización en una revuelta urbana espontánea en la cual participó prácticamente la totalidad de la comunidad cordobesa.

La noticia del asesinato de Mena se difundió rápidamente, sumándose a la protesta vecinos de clase media, quienes compartían la indignación colectiva, no sólo por la reciente brutalidad policial sino también por los tres años de autoritarismo vividos. Para las dos de la tarde la policía había sido totalmente desbordada y había tenido que replegarse en su central. Los dirigentes sindicales intentaron establecer cierto grado de control pero, para entonces, la rebelión había escapado de sus manos respondiendo al flujo y reflujo de la contienda callejera, sin tener en cuenta ningún plan estratégico superior. Los considerados símbolos del imperialismo y del régimen sufrieron duros ataques, se incendiaron las oficinas de Xerox, una concesionaria de Citroën y muchos otros negocios; se quemaron autos y se saqueó el Club de Suboficiales, con el fin de destruir los elementos allí existentes. No se registraron ac-



Enfrentamiento entre obreros cordobeses y la policía, 1969.

tos de pillaje, los manifestantes destruyeron pero no robaron.

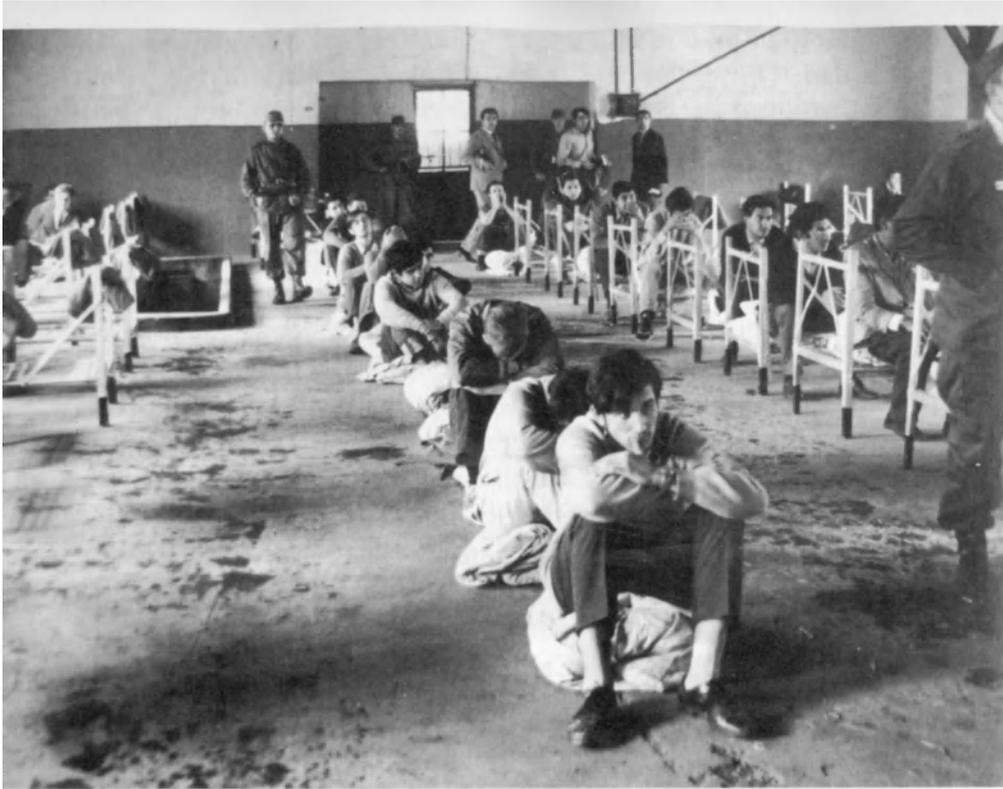
Al caer la tarde, la mayoría de los trabajadores se retiró hacia sus hogares, además varios dirigentes sindicales se mostraban recelosos de continuar participando en la protesta que ya no controlaban. Elpidio Torres, desde la sede de su sindicato, había perdido todo tipo de comunicación con Tosco y parecía que ahora el protagonismo había pasado a los estudiantes, trasladándose el principal foco de resistencia a los barrios estudiantiles, especialmente Alberdi y Clínicas. A la tarde intervino el Ejército, la aparición de algunos francotiradores en los techos agregó un tercer elemento al Cordobazo, el de haberse intentado una insurrección urbana por parte de algunos grupos más organizados con una finalidad más claramente política y, acaso, revolucionaria. La irrupción de esos grupos, no incluida en la planificación inicial de la protesta, es uno de los aspectos más controvertidos ya que el régimen atribuyó el Cordobazo a una conspiración minuciosamente organizada por la izquierda

revolucionaria, con el apoyo del comunismo internacional. En realidad, el componente insurreccional fue una faceta menor del Cordobazo si se lo compara con la protesta obrera y estudiantil o con la revuelta popular; sin embargo, no debe ser dejado totalmente a un lado porque habla de la existencia de un fenómeno que saldría claramente a la luz luego del Cordobazo.

En la madrugada del 30 de mayo, día del paro nacional convocado por la CGT, Córdoba era una ciudad tomada. Se oían disparos esporádicos y en el barrio Clínicas continuaba la resistencia. A pesar del toque de queda, ese día también se llevaron a cabo algunas marchas de protesta, se allanaron los principales sindicatos y fueron detenidos Torres, Tosco y otros dirigentes sindicales, imponiéndoseles penas de entre cuatro y diez años de prisión. Pasados los dos días de protesta el saldo de propiedades destruidas era considerable y la cifra oficial ascendía a doce muertos y noventa y tres heridos. El acontecimiento conmovió inmediatamente la esfera política nacional, el impopular gobernador Caballero tuvo que dejar el poder y la posición del régimen comenzó a ser seriamente cuestionada.



Marcha obrera y estudiantil durante el Cordobazo.



Detenidos durante el Cordobazo en el Tercer Cuerpo de Ejército esperan para ser juzgados por el Consejo de Guerra, junio de 1969.

El pos-Cordobazo: la conformación de un movimiento social de oposición al régimen

El Cordobazo cristalizó el cuestionamiento al régimen ya iniciado por diversos sectores de la sociedad. Además, pondría de manifiesto una crisis de autoridad en el interior de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que coincidió, también, con la aparición de la juventud en la esfera pública como un actor colectivo dispuesto a romper con el pasado y llevar a cabo lo que entendían como la reparación moral que el país necesitaba. Este proceso, que se había venido conformando durante toda la década del 60, encontró en la brecha abierta por el Cordobazo el escenario para una redefinición desde abajo creando el marco, a su vez, para que de la resistencia que había caracterizado a la etapa anterior se pasara a la acción colectiva.

Comenzó así a tomar cuerpo un *ciclo de protesta* que serviría de base para la construcción de un movimiento social. En efecto, luego del Cordobazo se habría operado un cambio en la estructura de las oportunidades políticas que tornó vulnerable al sistema político para la emergencia de un movimiento social. La conformación de este movimiento implicó la utilización tanto de vehículos formales (las organizaciones ya constituidas) como informales, redes sociales nuevas y recursos provenientes de diferentes fuentes y aliados. Pero lo que lo hizo posible fue el enmarcar culturalmente la posibilidad de la acción, es decir, se construyeron socialmente los tres componentes básicos para la acción colectiva: la percepción de injusticia, el convencimiento de que era posible revertir esa situación a través de la acción y la construcción de una fuerte identidad, un “nosotros” capaz de promover los cambios.

Además de la percepción de injusticia y de la conformación de una identidad, hacía falta la oportunidad política para sostener el ciclo de protesta. La contundencia de las movilizaciones iniciadas mostró al gobierno la necesidad de modificar su orientación, instalando ciertas prioridades en su agenda con objeto de frenar el descontento popular. Tanto es así que, luego del Cordobazo, éste basó su política frente a los sindicatos en dos ejes principales: por un lado, conseguir la paulatina normalización de la CGT dividida en dos líneas antagónicas, a fin de obtener apoyo institucional para los planes del gobierno y, por otro, restablecer aunque en forma condicionada el mecanismo de la concertación colectiva para flexibilizar la posición de los sindicatos. Así se abrieron canales de acceso a la participación por donde expresar el descontento obrero, que actuaron como disparadores de ciertos movimientos de base en las empresas automotrices de Córdoba y en otros puntos del país.

Entre los sectores dominantes se acentuaron también las divisiones tras el impacto que significó la aparición pública de la organización guerrillera peronista Montoneros, con el secuestro y muerte del ex presidente general Pedro Eugenio Aramburu en junio de 1970, lo que condujo al reemplazo de Onganía por Levingston. Estos hechos sacudieron la estabilidad del bloque dominante creando una fuerte sensación de incertidumbre que llevó al nuevo presidente a revisar la orientación de la política económica y social, dándoseles mayor parti-

cipación a los distintos sectores sociales, fundamentalmente a los del trabajo para intentar frenar con ello la posible radicalización.

Otro aspecto importante por considerar en la creación de las oportunidades políticas se refiere a la adhesión de aliados influyentes que apuntalaron y dieron cuerpo a una retórica de cambio. Así, los movimientos de base que tuvieron lugar principalmente en Córdoba en el sector dinámico de la economía, pero también en otros puntos del país, contaron con el apoyo de otros sectores sociales, entre ellos el de intelectuales progresistas como abogados que, además de asesorar a la nueva dirigencia, iniciaron sistemáticas campañas de reclamos por la liberación de los presos políticos y sindicales. También ciertos párrocos enrolados en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo brindaron no sólo apoyo material y espiritual a los trabajadores sino que instalaron su problemática entre otros sectores sociales. Otro aliado permanente fueron los estudiantes que colaboraron para la difusión de los movimientos y para darles un contenido más integral a las reivindicaciones.

Antes de seguir avanzando, y como una manifestación más de la conformación del ciclo de protesta a la que hemos hecho referencia, se hace necesario volver la atención sobre la importante rebelión que tuvo lugar en otra ciudad industrial del interior del país antes de finalizar 1969.

El Rosariaz

La huelga general nacional decretada por las dos CGT para el 27 de agosto de 1969 continúa el ciclo de protesta abierto iniciado en mayo. En ese contexto, también la huelga ferroviaria que desde Rosario se irradió al resto del país sería el detonante de la huelga general activa llevada a cabo en esa ciudad y su cordón industrial los días 16 y 17 de septiembre de 1969. Ésta coincidió con la ocupación de la fábrica que para entonces tenía lugar en la planta de Grandes Motores Diesel, de la empresa Fiat de Córdoba. El punto de partida de la huelga ferroviaria que se inició el 8 de septiembre en los talleres ferroviarios de Rosario, Pérez y Villa Diego —personal adherido a la Unión Ferroviaria, cuyo sindicato estaba intervenido— fue

la sanción aplicada a un empleado jerárquico, a la vez delegado gremial, que se negó a firmar los apercibimientos a trabajadores que habían acatado el paro del 27 de agosto. A esta medida se sumó el día siguiente el resto del personal adherido al otro sindicato ferroviario, La Fraternidad, y para el 10 la huelga se había extendido a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, manteniéndose hasta el 27 de septiembre.

Frente a esa situación, el gobierno nacional convocó el 16 de septiembre al personal ferroviario que se encontraba en huelga para la prestación del “servicio civil de defensa”, quedando sometido a la justicia militar el personal que no se presentara. Para entonces, diferentes entidades sindicales, políticas, estudiantiles, se solidarizaron con los obreros; incluso la CGT de Córdoba declaró paro general y el gobierno provincial decidió decretar feriado para “prevenir inconvenientes” dado el peso simbólico que tenía el 16 de septiembre para los trabajadores. En la Capital Federal y en Rosario, las mujeres de los ferroviarios elevaron peticiones a las autoridades detallando la situación en la que se encontraban sus familias. El 16 de septiembre la CGT de Rosario decretó el paro activo por 38 horas, llamando a una movilización y posterior concentración frente al local de la CGT.

Los estudiantes se plegaron al paro, a pesar de que el día anterior las autoridades habían emitido un comunicado por el cual alertaban a la población, en virtud del estado de sitio, sobre la prohibición de toda manifestación. Luego de la experiencia del Cordobazo, las fuerzas policiales fueron reforzadas por Gendarmería Nacional y por contingentes especializados en la lucha antisubversiva y, desde temprano, se desplegaron no sólo por la zona céntrica sino también por los barrios donde se encontraban las principales fábricas y talleres, con objeto de impedir el ingreso de los manifestantes en la zona céntrica. Sin embargo, antes de las 10 de la mañana, ocuparon ese sector obreros pertenecientes a sedes sindicales con ubicación en el centro, como los de Obras Sanitarias, Luz y Fuerza y ferroviarios, entre otros, y también lograron llegar columnas provenientes de la zona sur y portuaria. En su desplazamiento fueron construyendo barricadas e incendiaron algunos autos y ómnibus para impedir el paso de los vehículos policiales, se atacaron comercios y se registraron enfrentamientos con la po-

licía con el saldo de un herido de bala. Algunas columnas que lograron llegar desde los barrios intentaron penetrar el cordón policial que rodeaba el centro sin éxito pero, al mismo tiempo, impedían también la salida de las fuerzas de represión.

De igual manera, en los barrios se construyeron barricadas a fin de impedir el ingreso de esas fuerzas. Recién a media tarde el centro fue desalojado y la lucha se desplazó hacia los barrios, sobre todo hacia el norte y el sur de la ciudad, principales zonas fabriles. Para entonces, la participación popular era muy notable. La zona norte quedó controlada por su población, se incendió la estación ferroviaria de Arroyito y se intentó quemar un tren cargado con bolsas de azúcar, igual proceder se siguió en otras estaciones ferroviarias. En la zona sur, murió un menor de 12 años herido de bala. Esa noche algunas columnas rompieron el cerco de seguridad, varias zonas quedaron sin luz y se bloquearon rutas provinciales y nacionales. El día 17 continuaron los ataques: varias plantas industriales, garitas, sucursales bancarias, camiones, maquinaria, etc., fueron quemados.

A medianoche del 17 de septiembre culminó la huelga general con movilización pero la lucha continuó en manos de los obreros ferroviarios, expandiéndose hacia el resto del país siguiendo las vías férreas. Así, entre el 17 y el 20 de septiembre se sucedieron una serie de hechos en distintos puntos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán, tales como atentados contra el personal jerárquico que cumplía tareas, descarrilamiento de trenes, atentados contra vagones, corte de energía de las señales, obstáculos en las vías, sabotajes en los talleres ferroviarios, atentados con explosivos en vías y boleterías, entre otros. Para entonces se decidió que el Ejército tomara en sus manos el asalto final para terminar con la rebelión. Se colocaron dos mil efectivos para la defensa de los objetivos ferroviarios, incluida la instalación de baterías antiaéreas. Varios detenidos pasaron a engrosar las listas de presos políticos y sindicales abiertas con el Cordobazo, pero el carácter más marcado de insurrección urbana que tuvo el Rosariazo insinuó ya los cambios que se estaban operando en el escenario político y que se definirían más claramente a comienzos de los '70.

La irrupción de las bases en las plantas fabriles y la expansión del ciclo de protesta

Si se consideran las estructuras utilizadas para la movilización, puede observarse también un cambio, aunque al comienzo no se subvirtieran abiertamente los mecanismos formales de canalización del conflicto contemplados dentro de la estructura sindical. Sin embargo, durante el desarrollo de la protesta, se fueron modificando los contenidos de las reivindicaciones hasta convertirse en un cuestionamiento a la dirigencia sindical. Eso fue lo que ocurrió, si, volviendo nuevamente a Córdoba, se considera la situación en sus sindicatos mecánicos luego del Cordobazo y, especialmente, en el marco abierto por la convocatoria a comisiones paritarias para la renovación de los convenios colectivos, donde comenzó a operarse lo que puede ser definido como un proceso de irrupción de las bases sobre los dirigentes. Como ejemplos más representativos habría que señalar los que tuvieron lugar a comienzos de 1970: la imposición de una nueva dirigencia en el SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord) luego de la asamblea del 23 de marzo, donde se exigió la renuncia de la Comisión Directiva por acusársela de pro empresarial y se eligió una nueva. También en el SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Fiat Materfer) hubo cambios de dirección, dando origen al sindicalismo “clasista” de Fiat, a partir de las ocupaciones de fábrica en la División Planta Matrices (Perdriel), integrada en la empresa IKA-Renault en mayo —donde se encontraba el personal más calificado e ideologizado dentro del SMATA—, y en la planta de Santa Isabel durante todo el mes de junio de 1970.

En todos los casos la movilización fue promovida por las bases o estructuras intermedias pero, luego, comenzaron a tejerse redes sociales más amplias donde se puso a disposición del movimiento de protesta una serie de recursos que excedían los de las organizaciones implicadas: sistemas de comunicación, cobertura en los medios, locales en las facultades para hacer conocer sus demandas, entre otros. Esto se evidenciaría claramente en la acción desplegada por la nueva dirigencia del SITRAC y del SITRAM que, desde una lucha inicial por hacer efectiva una verdadera representación sindical, exigieron la renuncia de las comisiones directivas anteriores, la democracia

interna y un convenio similar al del SMATA —al que la empresa Fiat sistemáticamente se había opuesto—, para ir agregando luego otros contenidos que la convertirían en uno de los polos aglutinadores de una alternativa política.

En efecto, las nuevas dirigencias del SITRAC y del SITRAM reconocidas recién en junio, luego de vencer tras las ocupaciones de las plantas en el mes de mayo la intransigencia empresarial y del gobierno que se negaba a hacerlo, se definieron opuestas a toda medida que implicara algún atisbo de burocratización, negándose incluso a integrar la combativa CGT regional. Sin embargo, la radicalización con que generalmente se asocia a este movimiento, sintetizada en la famosa frase “Ni golpe ni elección, revolución”, no estuvo presente desde sus orígenes sino que se fue definiendo sobre todo hacia el final del año '70 y más claramente en 1971 a partir del Viborazo de marzo de 1971.

A partir de los '70 se observaron entonces importantes cambios en los repertorios de confrontación. La experiencia acumulada por los trabajadores de los sindicatos líderes durante la década del 60 había sido la permanente movilización a través de las estructuras formales de los sindicatos, manteniendo una estricta disciplina sindical como medio de conseguir sus reivindicaciones. Pero la situación abierta luego del Cordobazo introdujo cambios en los que la disciplina y uniformidad anterior pasarían a ser sustituidas por una creciente demanda de autonomía y democracia de base, que se afirmó como un código común sobre todo entre los sectores juveniles. Lo novedoso entonces luego de 1969 fue que, recogiendo la experiencia previa de movilización y combatividad desplegada para hacer efectivas las demandas corporativas, se produjeron cambios en las formas de enfrentamiento y en los contenidos. Estas transformaciones se evidenciaban en la utilización de mecanismos más informales para la exteriorización de la protesta y en medidas de acción directa como la ocupación de fábrica con rehenes, que si bien formaba parte del acervo cultural de los trabajadores antes se había ejercitado con otro sentido. En efecto, esta práctica recogía experiencias previas como el plan de lucha lanzado por la CGT nacional en 1964 y la “gran huelga” de Fiat en 1965, pero, sobre todo en el primer caso, ésta había sido implementada desde las cúpulas sindicales según un

cronograma y planificación perfectamente establecidos, como demostración de fuerza para negociar pero, a la vez, controlando y evitando la iniciativa de los cuadros inferiores.

En cambio, a partir del Cordobazo, esta medida adquirió un carácter disruptivo para la forma convencional de negociación del conflicto pues la intención era llevar la disputa al centro de la producción, donde los trabajadores sin intermediarios, es decir, sin la mediación del sindicato, debían encontrar las soluciones disponiendo como elementos de presión de su fuerza de trabajo y de la apropiación momentánea de las herramientas y el espacio de la producción. Con estas medidas, que generalmente incluían la toma de rehenes y acciones violentas como amenazas con explosivos, se subvertían el principio de la exclusiva autoridad y propiedad empresarial en las plantas y, también como ya se ha dicho, la modalidad convencional de solución de los conflictos fabriles al desconocerse las autoridades sindicales constituidas, para pasar en algunos casos a cuestionar el orden general.

Relacionado con lo anterior, otro cambio importante operado durante el desarrollo del movimiento fue el de la apropiación de nuevos espacios, como la comunidad fabril, que buscaba implicar a diferentes sectores: organizaciones de la vecindad, parroquias, unidades básicas y de fomento, entre otros. Se intentó también proyectar los movimientos al centro del debate intelectual y social, buscando atraer la atención de los medios de comunicación y con la asistencia de los militantes a asambleas estudiantiles que tuvieron lugar en diferentes facultades, estrechándose vínculos con otros sectores sociales.

Otra característica nueva del repertorio de confrontación fue la búsqueda de trascender lo particular a través de medidas novedosas que atrajesen la atención de los medios y que, tanto a través de su táctica como de su contenido, implicaran a todos. Tal fue el caso de la forma de lucha escogida por el SITRAC para exigir la reincorporación de delegados despedidos: una huelga de hambre en la parroquia de Ferreyra, donde estaban ubicadas las plantas de Fiat, los días de Nochebuena y Navidad de 1970. La utilización de esa medida disruptiva, con alto contenido simbólico y moral, tuvo amplia repercusión en la opinión pública, contó con la adhesión de los sectores más diversos y provocó también un importante cruce discursivo en el

intento de explicar y representar la identidad de los trabajadores y del movimiento. Si una huelga de hambre en esa fecha tenía de por sí un efecto ejemplificador, mucho más impacto tendría por haberse llevado a cabo en la parroquia de Ferreyra. Estos trabajadores “clasistas”, acusados por algunos de ser marxistas, elegían imágenes con un alto contenido cristiano para sintetizar su mensaje y, a la vez, entre otras muchas manifestaciones de solidaridad, recibían la adhesión —por primera vez pública— de tres organizaciones armadas: las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.

El ciclo de protesta no quedó relegado a las principales ciudades industriales; por el contrario, entre octubre y noviembre de 1970 también tuvieron lugar dos importantes movimientos de protesta en Tucumán y Catamarca, el primero protagonizado principalmente por los estudiantes a los que se sumaron los obreros, y el segundo por agentes estatales y el pueblo en general, que repudiaron la política del gobierno provincial.

Nuevos actores ocupan el espacio público: las organizaciones armadas

Si bien la protesta social y la guerrilla coincidieron en el tiempo como fenómenos del pos-Cordobazo, es necesario diferenciarlos y no ver en la primera la génesis de la segunda. Se ha señalado antes que la opción por la vía armada se configuró tempranamente en la Argentina, producto de la particular cultura política en la que el adversario político fue reforzando cada vez más las características de enemigo y la debilidad del sistema de partidos desvalorizaba la democracia representativa. En ese marco vimos que el gobierno de Onganía apareció como el precipitador para que una particular forma de acción directa tomara cuerpo, acentuándose el proceso de conformación de organizaciones armadas provenientes de diferentes vertientes político-ideológicas. Sin embargo, lo novedoso del pos-Cordobazo fue que éstas ocuparon el espacio público presentándose claramente como una alternativa política más para el acceso al poder, sobre todo para los sectores juveniles. En efecto, si bien la idea de la violencia como camino de transformación social o política

antecede a los sucesos de mayo del '69, el proceso contestatario desatado allí tornó verosímiles varios de los argumentos que los grupos revolucionarios, peronistas o no, sostenían en relación con la transformación social y política, volviéndolos creíbles para amplios sectores. Así, la violencia —aunque con diferentes formas— comenzó a tematizarse como una opción posible mientras diferentes actores se iban sumando al movimiento social y alimentaban el ciclo de protesta.

Dentro de las organizaciones armadas de raíz marxista, el ERP y las FAL, surgidas antes de 1969, se convirtieron en los principales referentes luego del Cordobazo, buscando ganar espacios en los sindicatos a través de la creación de células revolucionarias en las fábricas. Pero en el año '70 entraría en escena la más importante organización armada de la Argentina por el caudal de personas que movilizó: la organización de la izquierda peronista Montoneros. Varios de sus jóvenes fundadores provenían de grupos nacionalistas católicos, muchos de ellos incluso habían militado en la agrupación nacionalista de derecha Tacuara en los '60, pero luego de expandirse el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo tuvieron un acercamiento a los sectores desposeídos sobre todo por la influencia del sacerdote Carlos Mugica y los escritos de Juan García Elorrio publicados en la revista *Cristianismo y Revolución*.

Su primera aparición pública tuvo un alto contenido simbólico: al cumplirse un año del Cordobazo —fecha coincidente con la del Día del Ejército— secuestraron a quien se identificaba como el primer “verdugo” de la resistencia peronista por el fusilamiento del general Valle en junio de 1956 y por la expatriación del cadáver de Eva Perón: el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Quienes participaron en el secuestro (Fernando Abal Medina y Emilio Ángel Maza), vestidos con uniformes militares y amparándose en sus conocimientos militares como liceístas, se presentaron ante Aramburu ofreciéndose como custodias. Tres días después fue asesinado luego de ser sometido a un juicio revolucionario. Fue un hecho muy arriesgado ya que entonces la infraestructura de Montoneros era mínima: contaba sólo con doce personas con importantes conexiones en Córdoba. La consecuencia inmediata en la estructura de poder fue la remoción de Onganía diez días después del secuestro y su reemplazo por Levingston.



Sigla del ERP pintada en Córdoba durante las huelgas de 1971.

En cuanto a las definiciones ideológicas, Montoneros no hizo diferencias al comienzo entre los sectores que luchaban meramente por el retorno de Perón al poder y los que buscaban una transformación socialista del país, la patria peronista como “patria socialista”. Había en ellos un culto a la acción sin precisar previamente su objetivo final. En su pensamiento se subordinaba la lucha de clases a las luchas populares nacionales, hecho que atrajo a gran número de jóvenes de clase media. No ocurrió lo mismo con los obreros industriales que, por lo general, los rechazaron, ya sea por asumir algunos sectores —como los de Córdoba— posiciones más radicales o por las tendencias pragmáticas y conciliadoras de gran parte del sindicalismo peronista, para quienes las estrategias armadas aparecían como ajenas a su experiencia y necesidades de trabajadores. El aliento que, sin descuidar otras estrategias, Perón dio a Montoneros y a otras agrupaciones tales como la Juventud Pe-

ronista (JP), la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), que comenzaron a formar la Tendencia Revolucionaria del peronismo, los convenció de que su particular visión de la “patria socialista” podría conseguirse con el retorno del líder. Dentro del sector revolucionario, los que apostaron a la opción obrera fueron conocidos como “alternativistas” y conformaron el Peronismo de Base para actuar a nivel de las fábricas.

Durante 1971, la otra organización armada más activa fue el ERP, que en mayo secuestró a Stanley Sylvester, cónsul británico honorario y director de la planta envasadora de carnes Swift en Rosario, que debió repartir 50.000 dólares en ropas y alimentos a los pobres con el fin de que lo liberaran. La otra operación importante del ERP fue el secuestro del director general de Fiat Concord, Oberdan Sallustro, en Córdoba en marzo de 1972, con objeto de que se reincorporaran los obreros despedidos al disolverse el SITRAC y se liberaran los guerrilleros y huelguistas encarcelados; el gobierno prohibió el pago

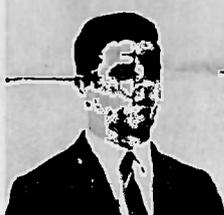


De izquierda a derecha, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Enrique Gorriarán Merlo, conductores del ERP.

POR EL SECUESTRO DEL SEÑOR TENIENTE GENERAL D. PEDRO EUGENIO ARAMBURU SE REQUIERE LA CAPTURA DE:



ESTHER NORMA ARROSTITO
alias "Irma", argentina, 30 años de edad,
casada. Cabello blanco, 1,62 mts. de estatura.
C. I. No. 4714121 P. F. - L. C. No. 3376-293.



MARIO EDUARDO FIRMENICH
alias "Manuel", argentino, 22 años de edad,
soltero. Cabello blanco, 1,60 mts. de estatura.
C. I. No. 6072924 P. F. - L. E. No. 7794-188.



FERNANDO LUIS ABAL MEDINA
alias "Fernando", argentino, 23 años de edad,
soltero. Cabello blanco, 1,85 mts. de estatura, del
gado. C. I. No. 5376317 P. F. - L. E. No. 4552175.

DENUNCIELOS!

A la POLICIA FEDERAL o al organismo policial más próximo en todo el país.

RAJIOYO AP-RIENOS AIRES JULIO 14 FICHE DISTINTI
 EN LA POLICIA, DONDE SE REQUIERE LA CAPTURA DE
 LOS PRESOPUGOS DEL SECUESTRO DEL T.E. ARAM
 BURU. (AP)

Afiche distribuido por la Policía Federal tras el secuestro del teniente general Aramburu.

del rescate y Sallustro fue muerto por los secuestradores al llegar la policía al lugar donde estaba cautivo.

La opción por la vía armada se reforzó también con la acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyo origen se remontaba a 1966, cuando unas cuantas personas se unieron con la esperanza de convertirse en el apéndice argentino del foco boliviano del "Che" Guevara. Su muerte condujo al derrumbe del proyecto pero, conducidas por Carlos Enrique Olmedo, iniciaron la guerrilla urbana en 1969. Al intentar salir de su aislamiento político, el giro hacia la lucha urbana fue acompañado de la peronización de las FAR, proceso que se consolidaría hacia 1971, para fusionarse finalmente con Montoneros a fines de 1972.

En cuanto al repertorio de confrontación utilizado por los grupos guerrilleros, es necesario destacar que más que buscar el enfrentamiento directo con el ejército o la policía, sus acciones aparecían como ejemplos de propaganda armada que buscaban ganarse la simpatía popular y también hacerse de recur-

sos. Trataron de hacer un uso mínimo de la violencia ofensiva que tenía blancos bien determinados, como representantes del régimen o, sobre todo en el caso del ERP, empresarios en conflicto con sus obreros, sin realizar actos terroristas al azar. Los secuestros también se utilizaron para obtener recursos para el mantenimiento de la organización o para ser distribuidos en villas de emergencia.

LA TRANSFORMACIÓN DEL CICLO DE PROTESTA OBRERA. LA HORA DE LAS DEFINICIONES POLÍTICAS

El año 1971 marcó la transformación de la protesta obrera, que adquirió contenido político y buscó trascender los límites locales para encarar un movimiento nacional. Puede decirse



Ocupación de la fábrica Fiat Concord en 1971.

que se produjo una rearticulación de la crisis, una reabsorción de la crisis social por los agentes políticos, sobre todo del campo opositor. La presión que venían ejerciendo distintos sectores de la sociedad tuvo que ser asumida por el gobierno de la Revolución Argentina y, nuevamente como en 1969, lo acontecido en Córdoba fue crucial para decidir el cambio de actitud del gobierno. Luego del segundo Cordobazo o Viborazo Levingston fue reemplazado por Lanusse, quien desde esa ciudad el 1º de mayo lanzó el Gran Acuerdo Nacional (GAN) prometiendo la convocatoria a elecciones en el corto plazo. Ya en noviembre de 1970 representantes de los principales partidos políticos se habían reunido en un encuentro que se conoció como La Hora del Pueblo para exigir la salida electoral y un cambio sustancial del modelo económico-social. Sin embargo y a pesar de que, como hemos visto, ya habían aparecido en escena las organizaciones armadas, fue necesaria una contundente protesta social, a la que se sumaron aquéllas, para convencer al gobierno de la conveniencia de esa salida. Es que en el Viborazo convergieron quienes aparecían como los principales exponentes del cuestionamiento al régimen: los trabajadores de los sindicatos líderes y representantes de las organizaciones armadas unidos en lo que, de no frenarse, podría abrir el camino para una insurrección general.

El segundo Cordobazo o Viborazo: la caída de los gobiernos provincial y nacional

Los problemas comenzaron a plantearse a partir de la ocupación de las plantas de Fiat que tuvo lugar el 14 de enero de 1971 como reacción frente al despido de siete obreros, algunos de ellos delegados, y que llevó a la empresa a solicitar la intervención del Ejército para desocupar la fábrica. Los trabajadores tomaron a dos funcionarios de la empresa como rehenes y la crisis de Fiat se extendió por toda la ciudad cuando la totalidad de los trabajadores mecánicos convocaron a una huelga de solidaridad para el día siguiente. La mediación del gobernador de Córdoba, Bernardo Bas, impidió que la ciudad fuera ocupada militarmente disponiéndose la conciliación obligatoria, pero la actitud de los obreros de no dejarse amedrentar por las



Huelga en Córdoba en 1971.

amenazas y negarse a abandonar la planta hasta que la patronal cedió fue valorada como un “triunfo frente a la empresa imperialista”. Pero más que el fin del conflicto, la huelga de enero fue el primero de una serie de hechos que culminarían en la segunda gran protesta obrera y levantamiento popular de Córdoba en menos de dos años. El 29 de enero SITRAC y SITRAM presentaron una propuesta de convenio según los lineamientos del negociado por el SMATA. Pero, a pesar de que el resultado de la conciliación obligatoria por el conflicto de enero reconoció las reivindicaciones de los obreros, la empresa se negaba a negociar con los trabajadores de Córdoba, argumentando que las negociaciones debían realizarse en Buenos Aires. Esa situación conflictiva coincidió con un momento político particularmente sensible en Córdoba.

El 1º de marzo Levingston designó a José Camilo Uriburu, hijo de una familia aristocrática y representante de la derecha católica, como gobernador de Córdoba en reemplazo del más contemporizador Bernardo Bas. Ese nombramiento se hizo en medio de una serie de movilizaciones llevadas a cabo por dife-

rentes sindicatos de Córdoba y cuando la CGT regional estaba programando un paro general para el 12 de marzo. En ese clima, el nuevo gobernador anunció en un discurso en la localidad cordobesa de Leones que “Dios le había encomendado la misión de cortarle la cabeza a la víbora venenosa que anida en Córdoba”.

La respuesta del movimiento obrero cordobés fue programar una acción conjunta de todos los sindicatos, incluidos los de Fiat, para el día 12. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en las medidas que se debían adoptar; mientras la CGT y Luz y Fuerza proponían ocupaciones de los lugares de trabajo, el SITRAC y el SITRAM preferían una marcha al centro con concentración, es decir, la misma estrategia utilizada en el Cordobazo, a la que los demás sindicatos se oponían argumentando que habría una fuerte represión. Cuando la segunda moción fue vencida, se acordó primero hacer las tomas y luego marchar al centro. Pero el día 12 los trabajadores de Fiat, en vez de ocupar las plantas, decidieron abandonarlas y realizar una manifestación, marchando hacia los barrios de las cercanías donde los estaban esperando unidades policiales enviadas para disolver la concentración. La policía disparó sobre los trabajadores y mató a un obrero, provocando —como había

Relato del entierro del obrero Adolfo Cepeda, 14 de marzo de 1971

“Durante seis o siete kilómetros, el cortejo, formado por unas cuatro mil personas, ha venido llevando el ataúd a pulso. Sobre él puede verse, por entre los cientos de cabezas de la barrera humana, una bandera del ERP junto a la argentina (...) Rodeando la gran cruz, que desde la parte superior de una loma domina el cementerio, se han ubicado carteles con consignas: A UN COMBATIENTE CAÍDO NO SE LO LLORA, SE LO REEMPLAZA EN LA LUCHA. Parado sobre el pedestal de la cruz, Páez, dirigente del Sitram, único orador del acto, llama a ‘convertir el dolor en odio, en odio y combate contra los explotadores. Ha muerto un hijo de la clase obrera y debemos jurar vengarlo’. Los aplausos alteran la paz del cementerio.”

Fuente: Oscar Anzorena, *Tiempo de violencia y utopía*.

ocurrido en el Cordobazo— la ira colectiva, que transformó la manifestación en una protesta de masas. Durante todo el día hubo enfrentamientos con la policía y el 14 de marzo unos diez mil cordobeses acompañaron el cortejo fúnebre de Adolfo Cepeda.

Los trabajadores de Fiat abandonaron las plantas el lunes 15 de marzo con la intención de realizar una concentración masiva en el centro, pero errores en la coordinación hicieron que ésta no fuera organizada y que fueran fundamentalmente los trabajadores del SITRAC y del SITRAM y los de la planta de Industrias Mecánicas del Estado (IME), históricamente aislados del movimiento obrero cordobés, los que constituyeron los contingentes obreros más grandes en esa oportunidad. Luego de una breve concentración en el centro, los obreros se dispersaron por los barrios, varios para apoyar la ocupación que los del Sindicato de Luz y Fuerza estaban llevando a cabo en la usina de Villa Revol. Poco después se unieron a ellos estudiantes y ciudadanos comunes y en las primeras horas de la tarde la ciudad estaba una vez más sumergida en una ola de destrucción mayor incluso que la del primer Cordobazo, en términos de daños a la propiedad y en pérdida de vidas. El fracaso de los sindicatos en la coordinación de la protesta aseguró la veloz represión, especialmente por la llegada el día 16 desde Buenos Aires de una brigada antiguerrillera especialmente entrenada. El 17 se pidió la renuncia de Uriburu y, ante la nueva huelga general decretada por la CGT para el 18 de marzo, la ciudad fue ocupada militarmente y antes de fin de mes el presidente Levingston fue reemplazado por Lanusse. A diferencia del primer Cordobazo, el segundo tuvo un carácter mucho más obrero que popular, acompañado por la clara presencia de los nuevos actores políticos del momento, las organizaciones armadas.

Las definiciones políticas

Luego del lanzamiento del GAN, el gobierno combinó la apertura por la promesa electoral con la represión de los que no se integraran en ese esquema, procediéndose así a la detención de varios dirigentes del SITRAC-SITRAM acusados de

subversión. Agustín Tosco fue enviado a una cárcel del sur el 29 de abril y recién fue liberado a fines de 1972. Esta doble actitud provocó que a partir de entonces la lucha se planteara en términos políticos y obligó a definir las estrategias que se utilizarían. Con sus diferencias y matices, los distintos actores plantearon la necesidad de un cambio político. Las cúpulas sindicales que buscaron ocupar un lugar dentro de la nueva reorganización del movimiento peronista y otros sectores como el sindicalismo "combativo" de Córdoba se inclinaron más hacia un proyecto de socialismo nacional que uniera a los diferentes sectores del campo popular sin negar la posibilidad del canal de acceso "democrático".

Ahora bien, para explicar el pasaje del movimiento social a la acción política fue necesario que se dieran ciertas oportunidades políticas y tuvieran lugar una apertura y cambios en la agenda política. Esto ocurrió con el lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional y la promesa de prontas elecciones sin proscripciones. Ante esta instancia las estrategias debieron redefinirse, comenzando a mobilizarse recursos predominantemente políticos, en especial tras las medidas dadas por el gobierno: el 2 de abril, diecisiete días después del Viborazo, se declararon rehabilitados los partidos políticos y el 21 de junio se entregó a Lanusse el proyecto de ley que reglamentaría su actividad. En septiembre se reinició la afiliación en el justicialismo con una serie de actos simbólicos.

Sin embargo, estas medidas se daban en un escenario muy diferente del de años anteriores. Se habían producido algunos cambios en las formas de la acción colectiva: la definición de nuevas formas de confrontación y la utilización de canales informales para exteriorizar la protesta. La experiencia pasada dejó profundas huellas en marcos culturales que moldearon las estrategias escogidas. Por ejemplo, en la CGT local se creó la Comisión de Solidaridad, que inició una serie de recitales populares a beneficio de los familiares de los presos gremiales, políticos y estudiantiles y de los trabajadores de Fiat, a la vez que continuaba su lucha por un convenio que reconociera sus demandas, trataban de que su acción trascendiera el ámbito fabril. El objetivo de marcar la diferencia en la lucha llevada a cabo en Córdoba, que ya se definía no sólo contra la burocracia sino también contra el régimen, se evidenció en el interior

del mismo movimiento peronista. En el Plenario Nacional de Gremios Combativos, donde se habían reactualizado los programas obreros de La Falda, Huerta Grande y del 1º de Mayo de la CGT de los Argentinos, se resolvió emprender abiertamente la lucha contra el gobierno de Lanusse y en un acto posterior, en junio en el Luna Park, la delegación de Córdoba se presentó portando una bandera nacional de guerra atada a una rama de árbol.

En ese sentido, el sindicalismo peronista de Córdoba sufrió una permanente tensión entre, por un lado, mantener un proyecto como el esgrimido en el Plenario de Gremios Combativos, coherente con la experiencia de movilización vivida a partir del Cordobazo y, por otra parte, las exigencias de subordinarse a un plan político general decidido por Perón y los dirigentes nacionales. Esa tensión, producto de la particular experiencia anterior, fue decisiva en el papel desempeñado por los sindicatos de Córdoba para imponer una línea de izquierda en el partido —a pesar del peso que todavía mantenía la ortodoxia dentro de él y que se pondría de manifiesto en acontecimientos posteriores—, que se materializó en 1972 con el triunfo de la candidatura de Ricardo Obregón Cano y del dirigente de la UTA, Atilio López, para los cargos de gobernador y vicegobernador en las elecciones de 1973.

Dentro del espectro de posibilidades abiertas para las definiciones políticas, algunos sectores más radicalizados de los trabajadores de Fiat llegaron a plantear una salida revolucionaria. Sin embargo, esa alternativa no estuvo presente desde el origen en el “clasismo” de Fiat sino que puede ser considerada también como producto del proceso de movilización, de tomar parte en la acción dentro de una experiencia sindical particular, que había mantenido aislados a estos trabajadores de los organismos sindicales durante la década anterior pero no de los símbolos de la rebelión presentes en la cultura política cordobesa. Puede decirse que estos trabajadores recapturaron esos símbolos y los dotaron de un particular sentido al compás de lo que fue sucediendo también en otros sectores sociales que se plegaron al movimiento. En la opción “antiburocrática” escogida por el SITRAC y el SITRAM, que valoró negativamente hasta la propuesta de Agustín Tosco de conformar un frente popular con los sectores progresistas, se priorizó prote-

ger una identidad alternativa, de purismo obrero, frente a toda consideración estratégica, haciendo que el movimiento se volcara sobre sí mismo sin tomar demasiado en cuenta la identidad mayoritariamente peronista de los trabajadores.

Además, ésta aparecía ahora sólo como una entre las variadas y diferentes alternativas que se esgrimieron en la caldeada y movilizada Córdoba. Los diversos sectores comenzaron a dar forma a sus planes políticos y para algunos de ellos la radicalización que había servido para promover la acción colectiva podía, ahora, tornarse una amenaza. El peronismo sindical de Córdoba, sobre todo en su vertiente legalista, mantuvo la combatividad apuntalando y consiguiendo, como ya señalamos, el triunfo del ala política más de izquierda dentro del partido, pero no estaba dispuesto a apoyar alternativas que cuestionaran al peronismo como movimiento político representativo de los intereses de los trabajadores.

A la vez, hacia mediados de 1971, la transformación de la protesta en acción política significó también la primera declinación del ciclo de protesta obrera. Los datos ofrecidos por Brennan sobre la cantidad de paros y de horas perdidas en el complejo de IKA-Renault muestran una importante reducción de los conflictos durante el período 1971-1972. En esto habría incidido el hecho de que la confrontación comenzara a librarse preferentemente en la arena política y que, tras no aceptar los trabajadores de Fiat las propuestas de la empresa sobre el convenio de trabajo, fueran intervenidas militarmente las plantas y se procediera a retirar la personería gremial del SITRAC y del SITRAM y a expulsar a sus comisiones directivas y cuerpos de delegados en octubre de 1971. Estas medidas que limitaron la posibilidad de la protesta obrera no abortaron, sin embargo, la lucha política que a través de otros canales seguirían librando estos trabajadores.

El año 1972 no presentó exteriorizaciones importantes de protesta obrera, concentrándose las energías en la lucha política. En uno de los sindicatos más importantes de Córdoba, el SMATA, y como un ejemplo de la radicalización que sobrevino al Cordobazo, ganó las elecciones en el gremio en abril de 1972 un militante del PCR. René Salamanca, de la Lista Marrón, luego de catorce años de conducción peronista. En ese nuevo marco, los obreros de Fiat bregaron por el reconoci-

miento de su afiliación al ahora “clasista” SMATA de Salamanca, apoyados por una serie de plebiscitos en las plantas que así lo ratificaban, mientras se desarrollaban los apremios electorales. Sin embargo, luego de arduas tratativas, a fines de 1972 se adjudicó a la UOM la representación del personal de Fiat; las esperanzas de un cambio en esa situación fueron finalmente perdidas cuando el tercer gobierno peronista en 1973 no sólo ratificó esa decisión sino que emprendió una sistemática campaña para restablecer el verticalismo y aplacar todo intento disidente en la combativa Córdoba.

El régimen en retirada: puebladas y represión

En el contexto preelectoral de 1972 se combinó la lucha política llevada a cabo por los diferentes actores con la represión utilizada por el gobierno para sofocar las manifestaciones de rebelión popular y también con la escalada de violencia en ascenso desencadenada por las organizaciones armadas, algunas de ellas porque desconocían la vía electoral de acceso al poder y otras, como Montoneros, porque significaba una medida de refuerzo y de amenaza por si el gobierno no cumplía con sus promesas.

En efecto, las acciones de la guerrilla no se habían detenido y éstas, en cierta manera, aparecían también como definiciones políticas. La mayoría de las organizaciones no aceptaba la salida electoral como el mecanismo adecuado para el acceso al poder porque apostaban a la insurrección popular para garantizar sus objetivos o bien presuponían que la entrega del poder sería condicionada y con restricciones como lo había sido en otras oportunidades. Éste era el caso en especial de Montoneros, que había rechazado el GAN como una trampa del régimen. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el sector político del movimiento justicialista, Montoneros se mantuvo, al menos hasta fines de 1972, en una posición intransigente. En esto tuvo que ver también la estrategia desplegada por el propio Perón que, mientras alentaba las conversaciones de los políticos, hacía también lo propio con las acciones de los sectores revolucionarios, como una forma de jaquear por todos los flancos al régimen.

Para mediados de 1972 la popularidad de Montoneros había crecido notablemente y puede considerarse ese momento como el más álgido en cuanto al apoyo encontrado en las masas, sobre todo a través de las estructuras de la Juventud Peronista. En junio se realizó un proceso de unificación de sus diversos grupos en una estructura nacional encabezada por Rodolfo Galimberti, quien se desempeñaba desde hacía unos meses y por designación de Perón como representante de este sector en el Consejo Superior Justicialista. Esto hacía que, más allá del número que efectivamente integraba los cuadros de la organización armada, el apoyo brindado por la juventud y otros sectores sociales parecía convertirlo en un incipiente fenómeno de masas.

En noviembre de 1972, luego de diecisiete años de exilio, Perón regresó al país y terminó de concretar la formación de un frente electoral encabezado por la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima, ante la imposibilidad de postularse él mismo como candidato. En realidad todos sabían que, como cantaba el pueblo, esto significaba “Cámpora al gobierno, Perón al poder” y con este anunciado triunfo parecía cerrarse la larga agonía abierta en 1955. Para entonces sólo algunos grupos radicalizados se oponían a participar de la salida electoral, aunque ésta no fue valorada de igual manera por todos los sectores. Para muchos representaba un fin en sí mismo, para otros era el primer paso para el establecimiento posterior de la patria socialista. En el largo proceso abierto con la destitución de Perón muchos costos sociales se habían pagado, sólo en el período 1966-1973 unas cien personas habían sido muertas y quinientas fueron encarceladas por razones políticas. Sin embargo, el esperanzado retorno, como se verá, no traería la paz social. Por el contrario, los antagonismos, el autoritarismo y la intolerancia presentes en la sociedad y en su cultura política conducirían a una espiral creciente de violencia en el intento por definir a quiénes correspondía ser los artífices del nuevo proyecto de país por construir, una vez liberados —al menos provisoriamente— de la tutela militar. Sin embargo, la “patria socialista” no sería posible y un nuevo golpe —el más terrible de la historia argentina— cerró definitivamente el ciclo que se había abierto en 1955 y con él todos los proyectos de construcción de un orden superador, de inclusión para todos y que permitiera superar las antinomias del pasado.

BIBLIOGRAFÍA

Amaral, Samuel, y Plotkin, Mariano Ben (comps.), *Perón del exilio al poder*, Buenos Aires, Cántaro, 1993.

Anzorena, Oscar, *Tiempo de violencia y utopía (1966-1976)*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988.

Balve, Beba, y Balve, Beatriz, *El '69. Huelga política de masas. Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo*, Buenos Aires, Contrapunto, 1989.

Brennan, James Paul, *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.

———, y Gordillo, Mónica B., "Protesta obrera, rebelión popular e insurrección urbana en la Argentina: el Cordobazo", en *Estudios*, N° 4, revista del CEA de la UNC, Córdoba, julio-diciembre de 1994, pp. 51-74.

Ceballos, Carlos, *Los estudiantes universitarios y la política (1955-1970)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política N° 103, 1985.

Crenzel, Emilio, *El Tucumanazo*, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1997.

Cueva, Cecilia de la, y Sribano, Adrián, "Catamarcazo: protesta y acción colectiva en los años '70", ponencia presentada al XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), San Pablo, Brasil, 1997.

Gillespie, Richard, *Soldados de Perón. Los Montoneros*, Buenos Aires, Grijalbo, 1978.

Gordillo, Mónica B., "Los prolegómenos del Cordobazo: los sindicatos líderes de Córdoba dentro de la estructura de poder sindical", en *Desarrollo Económico*, vol. 31, N° 122, julio-septiembre de 1991.

———, *Córdoba en los '60: la experiencia del sindicalismo combativo*, Córdoba, Dirección General de Publicaciones de la UNC, 1996.

———, "Cultura y formas políticas de resistencia de los trabajadores peronistas en los '60", en *Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad*, Córdoba, Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC, A. I, N° 1, noviembre de 1997, pp. 47-84.

———, "Movimientos sociales e identidades colectivas: repensando el ciclo de protesta obrera cordobés de 1969-1971", en *Desarrollo Económico*, vol. 39, N° 155, octubre-diciembre de 1999, pp. 385-408.

James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

Ollier, María Matilde, *El fenómeno insurreccional y la cultura política (1969-1973)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Nº 145, 1986.

Salas, Ernesto, *La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Nº 297 y 298, 1990.

Tarrow, Sidney, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza, 1997.

Terán, Oscar, *Nuestros años sesenta*, Buenos Aires, Puntosur, 1991.

IX



El populismo imposible y sus actores,
1973-1976

por MARISTELLA SVAMPA



Aspecto de la Plaza de Mayo durante la asunción de la fórmula Perón-Perón, octubre
1973.



Entre 1973 y 1976 la Argentina vivió uno de los períodos más controvertidos y complejos de su historia reciente, aquel que muestra el trágico pasaje de una sociedad movilizada, caracterizada por una firme voluntad de cambio, aunque recorrida por la inquietud social, el autoritarismo y la violencia política, a una sociedad desarticulada, sumergida en una crisis plural, a la vez social y política.

Hablando rigurosamente, el ciclo de movilización se abre en 1969, con el Cordobazo, la protesta social más importante realizada contra el gobierno militar de Onganía, y se cierra en 1976, con el golpe de Estado militar que desplaza el gobierno de Isabel Perón. Sin embargo, el período que va de 1973 a 1976 presenta una especificidad propia, pues encarna como pocos un punto de máxima condensación de tensiones y contradicciones, ilustradas de manera acabada por el desencuentro que se produce entre la sociedad civil movilizada y el líder recién vuelto del exilio; por la imposibilidad de implementar con éxito el modelo populista del “pacto social”

así como de encapsular todo ese movimiento social dispar dentro de los tradicionales moldes nacionales y populares; en fin, por la progresiva lógica de exclusión que se va difundiendo en la sociedad argentina y que alcanzaría verdaderos rasgos demenciales durante la última dictadura militar. Por último, la época expresa también el clímax de un *ethos* específico, consustancial a la acción de los actores centrales de la sociedad movilizadora de los años setenta, procedentes de las clases medias y de las clases trabajadoras.

El período que nos ocupa registra tres momentos de inflexión insoslayables, marcados por las presidencias constitucionales del período: el primero, el de la breve presidencia de Héctor J. Cámpora, entre el 25 de mayo y el 12 de julio de 1973, corresponde al momento de la movilización generalizada y triunfalista de las fuerzas sociales que asocian el regreso de Perón con la posibilidad de introducir cambios mayores. Aunque los sectores movilizados no coinciden en los modelos de cambio, todos ellos se alimentan de una contracultura que impugna el régimen político así como los modelos sociales y los estilos culturales vigentes. En síntesis, este primer momento coloca en el centro de la escena la imagen de *una sociedad movilizadora para el cambio* y tiene por actores principales a la juventud, a sectores del sindicalismo combativo y a intelectuales ligados a la modernización desarrollista.

El segundo momento se extiende desde el mandato provisional de Raúl Lastiri, una vez concretada la renuncia de Cámpora, en julio de 1973, hasta la muerte de Juan D. Perón, el 1^o de julio de 1974. Esta fase confronta más claramente a los diferentes actores con *las contradicciones propias del populismo en el poder. La imagen dominante del período es la de la guerra interna: peronistas versus peronistas*. El árbitro de este dramático juego es el propio Perón. Un primer balance de este proceso da cuenta cabal de la imposibilidad de implementar el modelo nacional-popular, tanto en el frente político como en el económico. Su análisis nos permitirá preguntarnos acerca de las dificultades de la institucionalización de las fuerzas sociales movilizadas en una época en la cual el peronismo ocupa la casi totalidad del espacio político argentino. Veremos también cómo luego de la muerte de Perón resulta notorio el cierre de los canales institucionales a partir de los cuales se expresaban importantes actores sociales del período.

El tercer momento corresponde a la etapa de *la agonía y disolución del modelo populista*, durante la gestión de Isabel Perón, luego de la desaparición física del líder y de la rápida desarticulación de las fuerzas sociales anteriormente movilizadas (julio de 1974-marzo de 1976). La imagen fuerte del período es *la crisis plural, política, social y económica*. Importa señalar entonces quiénes son los actores políticos y sociales que cobran centralidad en este contexto: la acción gravitante del *sindicalismo* peronista tradicional y de sectores de extrema derecha comandados por el ministro de Bienestar Social, José López Rega; la progresiva vacancia de autoridad, la opción por el militarismo por parte de la *guerrilla*; por último, dar cuenta del avance de los *militares* hacia el poder, acompañado de una estrategia de “relegitimación” a partir del combate contra la “subversión”.

Pese a que cada momento posee rasgos específicos, atravesado por lógicas diferentes y una diversidad de actores sociales y políticos, el análisis de esas diferencias no puede hacer la economía del estudio del marco común de referencia que estructura la conducta de los actores, a saber: la crisis y el colapso del modelo populista.

La hora de la juventud maravillosa

Durante décadas, uno de los rasgos más resaltantes de la Argentina fue la división entre el sistema de poder y la sociedad civil. Esta brecha fue acentuándose hacia fines de los años sesenta, durante la Revolución Argentina, encabezada por el general Onganía, un ensayo corporativo en el cual el autoritarismo y la represión política iban acompañados por un notorio proceso de modernización, tanto económico como cultural.

La modernización cultural tuvo como actor central a las clases medias urbanas y abarcó numerosos aspectos de la vida cotidiana que incluían desde nuevos hábitos de consumo especialmente orientados al sector juvenil, así como el cuestionamiento de la moral sexual y familiar tradicional, el nuevo rol de la mujer y la divulgación del psicoanálisis, hasta aquellas dimensiones asociadas a las vanguardias y la experimentación artística (véase el capítulo VII).

Pronto la apertura cultural iría articulándose con la exigencia del compromiso político, invadiendo no sólo la discusión política sino también la producción académica, literaria, artística y musical. Determinados hitos políticos, como la descolonización de los países del Tercer Mundo y, más cercanamente, la Revolución Cubana (1959), fueron instalando en el terreno de lo fáctico el debate en torno de la revolución, contribuyendo así al proceso de radicalización ideológica que se profundizaría durante los gobiernos militares que se sucedieron entre 1966 y 1973 (véase el capítulo I).

Hacia el final de la experiencia militar, en un clima enrarecido por la violencia política y por los rumores de un posible golpe de Estado, que tendría por objeto impedir la candidatura de Perón, en julio de 1972 éste organizó con otros partidos el FRECILINA (Frente Cívico de Liberación Nacional), el que fue ampliado un poco más tarde y se convirtió en el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación). Por último, aunque Lanusse intervino para garantizar que Perón no sería proscripto, decidió establecer la llamada "cláusula de residencia", que prohibía expresamente la candidatura de aquellos ciudadanos que no estuvieran en el país antes del 25 de agosto de ese año, así como inhibía a funcionarios del gobierno con aspiraciones electorales que no renunciaran a sus cargos antes de esa misma fecha. En consecuencia, la cláusula excluía tanto a Perón como al propio Lanusse. Para el primero implicaba la obligación de nombrar un candidato-vicario; para el segundo, conllevaba la renuncia definitiva a sus conocidas pretensiones presidenciales.

Otro de los factores importantes de esta difícil transición fue la estrategia política adoptada por Perón, quien no vaciló en utilizar la creciente amenaza de la guerrilla urbana en su pulseada política con las Fuerzas Armadas y, más específicamente, contra Lanusse. Así, su lenguaje guerrillero se convirtió en un recurso disuasivo eficaz frente a unas Fuerzas Armadas educadas en la doctrina de la seguridad nacional y siempre reacios a la alternancia del poder, al tiempo que terminó por situar al propio Perón como la única alternativa capaz de garantizar la paz social amenazada. Fue por eso que, pese a los pedidos del gobierno militar, Perón no sólo no condenó explícitamente a las organizaciones armadas, sino que hizo todo lo posible por alentar su accionar.

En esta línea se sitúa una larga entrevista concedida en 1971 al grupo Cine de Liberación, que tendría gran influencia en la juventud del período. Allí Perón realizaba un llamamiento explícito a la juventud, planteando la necesidad de la “actualización doctrinaria” y el “trasvasamiento generacional” en el movimiento justicialista. Asimismo, en ese reportaje caracterizaba a las organizaciones armadas como “formaciones especiales”, concediéndoles el comando táctico en el teatro de operaciones y reservándose para sí mismo el rol de la conducción estratégica. Por último, Perón enunciaba tres vías para la lucha: la guerra revolucionaria, la insurrección y la normalización institucional. “La guerra revolucionaria”, deslizada a manera de clara advertencia contra el *establishment* militar, “era quizás un camino si no había otro camino”.

En realidad, la justificación de “la violencia popular” se hallaba expandida en vastos sectores progresistas de la sociedad, tuvo su punto de cristalización en el Cordobazo y luego se reforzó por la respuesta represiva del gobierno militar. En efecto, la profundización de la represión política y social no hizo más que confirmar que la violencia era un recurso válido, y quizás el único posible, contra un régimen autoritario y de más en más ilegítimo. Esta aceptación se ve reflejada por los resul-

Llamamiento de Perón a la juventud

“Ellos siempre piensan y titubean por falta de experiencia, yo siempre les digo que le metan nomás, ¿por qué? Porque peor que nosotros, los viejos, no lo van a hacer. Vea el mundo que les dejamos. Por macanas que hagan, peor que nosotros, los viejos, no lo van a hacer (...) Se van a equivocar, sí, bueno. Pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas, lo importante es que sepan bien dónde hay que navegar. Siempre poner el punto hacia los grandes objetivos; si eso se hace, el futuro está asegurado. El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el Movimiento Peronista es un movimiento del futuro.”

Fuente: J. D. Perón, *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder* (entrevista realizada por el grupo Cine de Liberación, 1971).



El obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, oficia misa en un barrio obrero junto a Carlos Mugica, 1971.

tados de una encuesta realizada por IPSA en noviembre de 1971, que daban cuenta de que el 45% de la población bonaerense justificaba la violencia guerrillera, mientras que en Rosario el porcentaje era del 51% y en Córdoba alcanzaba al 53%. En suma, la apelación a la “violencia desde abajo” encontraba una clara resonancia en diferentes sectores de la sociedad argentina, cubriendo un amplio arco de acciones que iba desde la protesta social hasta las espectaculares acciones guerrilleras.

Hacia fines de 1972 el encuentro entre una sociedad movilizadada y el líder proscripto tuvo un nuevo giro, marcado por la peronización del heterogéneo campo de las izquierdas. Este conjunto reunía diferentes ramas del sindicalismo, vastos sectores del mundo intelectual y artístico —muchos de los cuales habían alimentado férreas convicciones antiperonistas hasta

hacía poco tiempo—, amplias franjas de la juventud, sectores social-cristianos, como el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, y gran parte de la nueva guerrilla urbana. En efecto, ¿cuántos intelectuales de izquierda podrían suscribir las expresiones vertidas por el escritor Julio Cortázar, antiperonista en los '50, filoperonista en los '70, quien había proferido con reciente convicción que el FREJULI era un “movimiento visceral de todo el pueblo argentino hacia el reencuentro consigo mismo”! ¿Cuántos jóvenes había que sólo conocían el peronismo desde las entrañas mismas del antiperonismo y que en esa hora pugnaban por ser los primeros en vitorear al líder en nombre de una utopía situada en la ambigua intersección entre la Patria socialista y la Patria peronista! Todos reclamaban el retorno de Perón como condición necesaria para cualquier transformación social y política, y aun aquellos sectores que no tenían ningún interés en “peronizarse” consideraban que sólo su regreso haría posible la pacificación nacional.

Y aun cuando nadie tuviera muy en claro cuáles serían las estrategias institucionales que adoptaría el líder, el horizonte político argentino indicaba una única alternativa: sólo el retorno de Perón podía salvar al país del caos en el cual tendía a sumergirse. En el lenguaje enfático de la época, Perón se había convertido en “el Hombre”: expresión en la que convergían de manera elocuente una apelación mayúscula a la masculinidad con la figura carismática del Mesías. En suma, todo indicaba que Perón era el único líder capaz de aglutinar una gran parte del espectro de las fuerzas progresistas y revolucionarias, donde convergían posiciones cristianas, nacionalistas y de izquierda.

La juventud hacia la militancia política revolucionaria

El ciclo de movilización abierto por el Cordobazo había lanzado a los jóvenes a la arena de la protesta. En 1971, poco después del secuestro y la muerte de Aramburu, la agrupación Montoneros implementaría una estrategia política dirigida a la captación y encuadramiento de la juventud que habría de tener hondas consecuencias. Así, la agrupación, que en sus recientes comienzos no sobrepasaba la veintena de militantes, se convirtió en la organización político-militar hegemónica dentro del

colectivo de la guerrilla peronista (FAP, FAR y Descamisados).

Atento a dicho proceso, ese mismo año, Perón decidió incorporar en el Consejo Nacional Justicialista a Rodolfo Galimberti y Francisco Julián Licastro, ex teniente del Ejército, como representantes de la rama juvenil. Pero fue Galimberti, que llegó a Montoneros desde la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional (JAEN), quien asumió su representación virtual ante Perón, constituyéndose en una de las piezas clave a la hora de la convocatoria y organización de la Juventud Peronista.

El proceso se desarrolló de manera vertiginosa. En noviembre de 1972 se organizó el primer acto de unidad de la Juventud Peronista en el Club Defensores de Cambaceres de Ensenada. En junio de ese mismo año se realizó un nuevo acto en la Federación de Box, en el cual estuvieron presentes las diferentes corrientes de la JP. La asistencia de unas diez mil personas puso de manifiesto el rápido crecimiento, así como el claro predominio de la línea montonera. El único dirigente político nacional que concurrió en carácter de orador fue Héctor Cámpora, el delegado de Perón, quien anunció "el fin del sistema demoliberal, burgués, capitalista". Un mes más tarde, dicha estrategia daría sus primeros frutos a través de la formación de las JP Regionales, una estructura organizativa de superficie, coordinada por Montoneros, que habría de tener un gran protagonismo en la vida política de los años siguientes.

Así, lo propio del período es esta singular e intensa experiencia de articulación político-ideológica entre una sociedad movilizadora, sobre todo en sus sectores juveniles, y una agrupación armada. Gracias a la mediación de la Juventud Peronista, este vertiginoso proceso convertiría a Montoneros, aun de manera fugaz, en una de las organizaciones de masa más poderosas del continente. La época coincidió con la ampliación del compromiso militante que, de estar circunscripto al activismo estudiantil, pasó a volcarse a los barrios y a las villas. Los repertorios de acción abarcaban desde las tradicionales manifestaciones populares hasta la violencia guerrillera, pasando por la guerra de consignas y las pintadas. De modo que la experiencia política de los militantes juveniles fue desarrollándose dentro de estructuras bastante organizadas, generalmente cerradas, siempre jerárquicas. Su formación política fue fuerte-

mente desigual, caracterizada por un discurso saturado de referencias a la palabra del líder, sobre todo a las cartas, declaraciones y libros más recientes. En suma, la acción política de los militantes juveniles se forjó al calor de las movilizaciones, en el enfrentamiento con la dictadura, pero, sobre todo, por contraposición con los “viejos” militantes sindicales, identificados con el aparato burocrático y las estrategias de negociación y presión vandoristas.

La “montonerización” ocurrida entre 1972 y 1973 (la época del “engorde”) se tradujo, a su vez, en una política de afiliación masiva al Partido Justicialista. Se abrieron locales partidarios, se multiplicaron las unidades básicas, se intensificaron las movilizaciones barriales y villeras, en fin, se lanzó también la campaña “Luche y vuelve” a través de las pintadas. Se formó un frente de masas, sintetizado en la denominada “Tendencia Revolucionaria”, que incluía, además de la JP, el Movimiento de Villeros Peronistas (MVP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Agrupación Evita de la Rama Femenina (AE) y el Movimiento de Inquilinos Peronistas (MIP).

Uno de los hechos más resonantes del período fue la masacre de Trelew, acaecida en agosto de 1972. Ésta ocurrió luego de que los presos políticos confinados en el penal de Rawson, entre los cuales se contaban importantes líderes de las organizaciones armadas de izquierda, y en el marco de un vasto operativo montado por las FAR y el ERP, tomaron la cárcel y veinticinco de ellos lograron escapar hasta el aeropuerto de Trelew. Sólo seis, todos altos dirigentes de las organizaciones armadas, pudieron abordar un avión comercial previamente tomado que sería desviado hacia Chile. El resto fue atrapado y una semana después, arguyendo un intento de fuga, dieciséis de ellos fueron asesinados en la base naval Almirante Zar en la cual habían sido alojados. Sólo tres sobrevivieron milagrosamente a las heridas. El episodio generó un gran malestar en la opinión pública y el recuerdo de la masacre, bajo la figura del martirio, fue una de las banderas de lucha más sentidas durante la campaña electoral liderada por los sectores movilizados. Así, a las fuertes consignas que levantaba la JP, entre las cuales se destacaba, como hecho fundador, la reivindicación de la ejecución de Aramburu (“Duro, duro, duro, éstos son los Montoneros que mataron a

Aramburu”), se unió la promesa de vengar a los muertos de Trelew, alimentando la lista de los (jóvenes) mártires del movimiento, encabezada por el general Juan J. Valle.

En noviembre de 1972 Perón designó como secretario general en la estructura del Comando del MNJ a Juan Abal Medina, hermano de Fernando, uno de los fundadores y primeros caídos de Montoneros. Aunque Abal Medina era un partidario de la vía institucionalista y no tenía una relación orgánica con la agrupación armada, su solo nombramiento aportaba un nuevo gesto de reconocimiento simbólico del líder a la lucha entablada por Montoneros.

El 17 de noviembre Perón regresó luego de diecisiete años de ausencia. Durante su breve estadía (veintisiete días), la residencia de Gaspar Campos, en Vicente López, fue lugar de incesantes peregrinaciones y desfiles de peronistas, entre los que se destacaron las largas columnas de la Juventud Peronista,



Acto en Atlanta en el primer aniversario de los muertos en Trelew, 22-8-1973.

cerca de 100.000 militantes. El protagonismo de la juventud se acentuaría aún más durante la campaña electoral de 1973, como respuesta a la orden de “ganar la calle” que había lanzado la Secretaría de Prensa, en manos de la Tendencia. Tocaría a la JP, luego de un primer rechazo a la candidatura de la fórmula Cámpora-Solano Lima, acuñar también la célebre consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Finalmente, durante la campaña, se aceptarían los vínculos privilegiados de la juventud con el delegado y candidato Héctor Cámpora, apodado “el Tío”.

Ahora bien, el breve gobierno de Cámpora se caracterizaría por el recrudecimiento de la violencia y por la acritud de los debates en torno de las diferentes concepciones del peronismo, sea la experiencia del gobierno nacional-popular, sea la de una vía “revolucionaria”, o para decirlo con vocablos de la época: la opción entre la “Patria peronista” o la “Patria socialista”.

EL PRIMER MOMENTO: LA CONSAGRACIÓN DE LA JUVENTUD

El 11 de marzo de 1973 votaron 12 millones de ciudadanos, entre los que se incluían 3 millones de nuevos votantes. La fórmula del FREJULI obtuvo el 49,6%; la UCR, el 21,29%. A pesar de no haber alcanzado el 50% de los votos, la UCR reconoció la legitimidad del triunfo y no hubo segunda vuelta para la fórmula presidencial. Sí la hubo en quince provincias, y también en Capital Federal, donde se impuso la UCR y Fernando de la Rúa ganó una banca de senador.

El triunfo electoral se festejó en todo el país. Antes de la medianoche de ese “día peronista”, se levantó la prohibición de las manifestaciones, lo que produjo el retiro de los efectivos policiales. Una marea de manifestantes desembocó en la sede del comando de campaña, en la calles Oro y Santa Fe de la Capital, donde estaba apostado Cámpora, bajo un póster de Perón, escoltado por Juan Abal Medina y el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel. Una miríada de cánticos festivos y agresivas consignas de lucha convergían en una sola voz.

Sin embargo, no todos los días serían tan peronistas como éste para la “gloriosa Juventud”, que había llegado al clímax



Héctor J. Cámpora en un acto durante la campaña electoral.

de su consagración política. Sólo un mes después de las elecciones tuvo que soportar una de sus primeras amputaciones: en el acto fundacional de la UES, Galimberti, acompañado por Abal Medina, pronunció un discurso incendiario llamando a la creación de milicias populares. La arenga se produjo en un momento en el cual las acciones guerrilleras habían recrudecido: copamiento del ERP en la Central Atómica de Atucha; la toma de Villa Allende, en Córdoba, por parte de las FAR; secuestros y ejecuciones de miembros de las Fuerzas Armadas realizados por el ERP y por Montoneros. La ira de Perón no

tardó en caer sobre los jóvenes dirigentes: tanto Galimberti como Abal Medina fueron conminados a presentarse en Madrid, donde se realizó una suerte de cónclave en el cual participaron representantes de las diferentes ramas del peronismo, entre ellos la ortodoxa Norma Kennedy, por la rama femenina, y el coronel Osinde (quien tendría una siniestra responsabilidad en los trágicos sucesos acaecidos meses después en Ezeiza), que terminó con la degradación de Galimberti. El hecho también signaría el comienzo del destierro político del entonces secretario general del MNJ, Abal Medina, quien recibiría la orden de “no innovar” hasta la llegada de Perón al país.

El 25 de mayo de 1973 fue un día de jubiloso desborde. Asistieron a la ceremonia de asunción de Cámpora una cohorte de representantes de gobiernos latinoamericanos, entre los cuales se destacaban el presidente chileno Salvador Allende y su par cubano, Osvaldo Dorticós, fervorosamente saludados por la multitud a través de cánticos y consignas de lucha. Luego de que Cámpora recibiera la banda presidencial, en vez del

Himno Nacional, se entonaron las estrofas de la Marcha peronista. El nuevo presidente pronunció un duro discurso en el cual proclamó llegada “la hora de Perón”, así como rindió homenaje a la “juventud maravillosa” que, “en los momentos decisivos, supo responder a la violencia con la violencia y oponerse, con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante. Cómo no ha de pertenecer también a esa juventud este triunfo”, se preguntaba el presidente electo, “si lo dio todo —familia, amigos, hacienda, hasta la vida— por el ideal de una Patria Justicialista. Si no hubiese sido por ella, tal vez la agonía del régimen se habría prolongado”.

La jornada festiva estuvo salpicada por algunas refriegas con la policía y otros incidentes de neto corte simbólico. Así, el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Rogers, no pudo presenciar el acto de asunción del mando, porque una multitud que coreaba consignas antiimperialistas le impidió llegar hasta la sede del poder. Los miembros de la Junta Militar tuvieron que abandonar el lugar en helicóptero. Una pintada escrita en aerosol adornaba una de las paredes de la Casa Rosada, a la que alguien había rebautizado “Casa Montonera”. No sólo la histórica Plaza de Mayo, sino también el mismísimo Salón Blanco se llenaron de jóvenes con camisetas floridas y desabotonadas, vestidos de blue jeans y camperas, con los dedos abiertos en “V”. En medio de un confuso episodio, Juan Carlos Dante Gullo, uno de los delegados regionales y dirigente de la JP, tomó a su cargo la seguridad del acto. Los siete delegados de las regionales de la JP aparecieron en los célebres balcones junto con Cámpora, saludando a la multitud que no cesaba de vitorear la consigna: “Se van, se van y nunca volverán”. Al anochecer, el foco de atención se trasladó hasta la cárcel de Villa Devoto, donde se hallaban gran parte de los presos políticos de la dictadura, la mayoría ligados a organizaciones armadas de izquierda. Acompañados por una cada vez más nutrida multitud, se exigía su liberación. Luego de apresuradas negociaciones, Cámpora resolvió firmar el indulto presidencial otorgando la amnistía general a los presos políticos, que sería aprobada dos días después por el Parlamento.

Este hecho, conocido con el nombre de Devotazo, al cual el senador peronista Vicente Saadi no vaciló en caracterizar como

“una segunda toma de La Bastilla”, merece algunas aclaraciones. Por un lado, el Devotazo asumió el carácter de un hecho irresistible, una expresión de la fuerza de las cosas, natural corolario de un proceso histórico-social. Por el otro, legitimó, sin grandes distinciones, todas aquellas formas de resistencia desarrolladas en contra de la dictadura. Desde esta perspectiva, conllevaba la justificación de la violencia de la guerrilla como respuesta a la violencia del Estado. Por último, para las Fuerzas Armadas y otros sectores de la derecha, no sólo ponía en evidencia la orientación ideológica del gobierno recién asumido, sino que los confrontaba a las futuras consecuencias de la liberación de los principales dirigentes de las organizaciones armadas que venían constituyéndose en los últimos años.

Mientras tanto, un clima de fiesta, plagado de declaraciones

ampulosas y enfáticos juramentos, perfumaba la primavera camporista y colocaba en el centro de la acción épica a la Juventud Peronista, la que aparecía, según palabras de Cámpora, como *vanguardia de defensa del pueblo argentino*. Una muestra de este sentimiento aparece en las declaraciones del triunfante candidato a vicegobernador de Córdoba, Atilio López: “Yo quiero señalar concretamente esta noche, donde ya mi pueblo de Córdoba, la clase trabajadora, nuestra gloriosa juventud, la vieja guardia peronista y todo el pueblo me han consagrado vicegobernador: yo, como hombre del movimiento obrero, ya que no vengo a pedir ni vengo a plantear



La cárcel de Villa Devoto en vísperas de la liberación de los presos políticos en mayo de 1973.

la necesidad del voto, *vengo a comprometerme ante mi pueblo para decir que si no sé cumplir, esa gloriosa juventud sepa ajusticiarme*". En este período, los peronistas ligados al ala izquierda asocian la juventud a una gesta heroica, y son pocos los que entrevén el horizonte oscuro que los acecha. Basta recordar que el propio Atilio López, quien provenía de las filas del combativo sindicalismo cordobés, sería asesinado más tarde por los escuadrones de extrema derecha, la Triple A, comandada por el ministro López Rega desde su despacho en Bienestar Social.

Entre el movimiento y la institución

La composición del gabinete que acompañaría a Cárpora daba cuenta del conglomerado de organizaciones y tendencias heteróclitas que caracterizaba al movimiento: el Ministerio de Trabajo era ocupado por José Otero, sindicalista y hombre de la UOM; el peronismo histórico estaba representado por dos hombres de centro: Antonio Benítez en Justicia y Jorge Taiana en Educación. El sillón del Ministerio de Economía fue ocupado por José Ber Gelbard, paradigma de la CGE y responsable de implementar el "pacto social". El joven Esteban Righi, estrecho colaborador de Cárpora y allegado a la JP, ocupó el Ministerio del Interior, mientras que Juan Carlos Puig, también cercano a la Tendencia, se haría cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, el sibilino y cada vez más influyente secretario personal de Perón, José López Rega, asumió el Ministerio de Bienestar Social.

Por estatuto, la distribución de los cargos preveía un 25% para cada rama del partido (la política, la sindical, la femenina y la juvenil). Sin embargo, la JP, que nunca dejó de vivir con cierta incomodidad y hasta contradicción la disputa por la distribución del poder, sólo obtuvo el 18%. Dos gobernadores de las provincias más importantes, Oscar Bidegain, en Buenos Aires, y Ricardo Obregón Cano, en Córdoba, tenían afinidades con la Tendencia. También era el caso de un bloque de diputados nacionales, entre los cuales se encontraba Nilda Garré. Por otro lado, el campo de la cultura y, más claramente, el ámbito universitario, aparecían como claramente hegemonizados por la Tendencia.

Recordemos también que, además de las leyes antirrepresivas que sancionó apresuradamente el Parlamento, otros hechos marcarían la coloración ideológica inicial del gobierno, como el discurso del ministro de Interior, Esteban Righi, a la Policía Federal, éste redefinió los deberes del cuerpo, exclamando que “el pueblo ya no es más el enemigo sino el gran protagonista”, o aquel otro del embajador Vázquez frente al Foro de las Naciones Unidas, anunciando los nuevos lineamientos tercermundistas de la política internacional.

Pero, pese a la modulación radical que se percibe en los momentos políticos iniciales, pese al vínculo privilegiado que la Juventud había desarrollado con el presidente vicario, el gobierno camporista estaba lejos de proyectar un escenario único en resonancia con estos actores. En efecto, más allá de la puja inevitable por los espacios de poder, el gran debate que comienza a instalarse en esa época, multiplicando las escenas de conflicto, *es la demanda de institucionalización del movimiento*, planteada primero con hesitaciones desde el seno del gobierno camporista, expresada cada vez con mayor firmeza por el propio Perón, exigida, en fin, por la realidad misma de las alianzas económicas establecidas. En suma, de lo que se trataba, a pesar de las oscilaciones iniciales, era de plegar la acción de los actores involucrados a las determinaciones del gobierno recién asumido, en última instancia, a la voluntad del propio Perón.

La demanda de institucionalización atravesaba tres escenas: la propiamente económica, donde jugaban su disputa los actores corporativos; la política, en la cual se trataba de definir la relación con las organizaciones armadas peronistas; por último, la específicamente social, que daba cuenta de una sociedad movilizada cuya participación desbordaba claramente los canales previstos por la institucionalización.

La primera gran escena coloca en el centro de las preocupaciones del gobierno nada menos que la posibilidad misma de aplicación del modelo populista, a través de la figura de la concertación social. En efecto, no hay que olvidar que, desde sus orígenes, el modelo nacional-popular implicaba una determinada forma de intervención del Estado, regulador de los mecanismos de redistribución del ingreso nacional entre, por un lado, trabajadores representados por los sindicatos y, por otro

lado, los sectores empresariales. Aludía entonces, y antes que nada, a una alianza de clases, sólo realizable dentro del marco de un “pacto social”. Éste había sido el modelo que Perón había implementado con éxito durante sus dos primeros mandatos y no eran pocos los que guardaban un recuerdo idealizado de la época. Pero el paso del tiempo acusaba diferencias notorias entre ambas épocas: si hacia 1950 la participación del sector asalariado en el ingreso nacional había alcanzado su punto máximo con el 46,52%; en 1971, ésta ya se había reducido al 38%. A esto hay que añadir que los límites de las posibilidades redistributivas de este modelo habían ido operándose en un contexto histórico en el cual, paradójicamente, los sindicatos habían desempeñado un rol importante. Luego de la caída del peronismo, éstos habían extendido sus esferas de representación, convirtiéndose en un poderoso actor político y social, cuyo peso en la puja distributiva habría de ser, en muchos casos, independiente de la coyuntura económica.

El “pacto social”, suscripto por la CGT, la CGE y el gobierno, establecía el congelamiento de precios y la suspensión de negociaciones colectivas durante dos años, así como el reajuste de tarifas públicas y sólo un aumento del 20% en los salarios. Para lograr su concreción, Perón había tenido que desplegar toda su capacidad de presión e influencia sobre las huestes sindicales, sobre todo a través del leal secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Sumemos a esto que el incremento salarial había defraudado las amplias expectativas de la clase trabajadora, mayoritariamente peronista. En fin, los hechos posteriores, signados tanto por el aumento de la conflictividad social en un contexto de puja intersectorial como por la desaparición física del líder y el recrudecimiento de la violencia, terminarían por sellar el fracaso del pacto populista.

En segundo lugar, la vía de la normalización institucional, identificada de ahora en más con el gobierno electo, evocaba un núcleo irresuelto en la compleja relación entre las organizaciones armadas peronistas y Perón. Una vía que aquéllas no terminaban de rechazar del todo, aunque fuera relativizada tanto en los hechos como en las declaraciones. Así, un día antes de la asunción del gobierno, las FAR y Montoneros habían dado a conocer un documento conjunto que separaba el “gobierno” del “poder”, manifestando su apoyo al gobierno elec-

to, pero afirmando la continuidad de la lucha armada. El 13 de junio, Cámpora recibiría a los principales dirigentes de las organizaciones armadas peronistas. La reunión no tenía otro fin que exigir el acatamiento al nuevo orden, lo cual conllevaba, en primer término, la aceptación del “pacto social” propuesto por el ministro Gelbard, pieza fundamental del gobierno populista. De esta manera, por primera vez, las organizaciones armadas peronistas experimentarían la obligación de ajustarse a los moldes nacional-populares que disponía el gobierno, aceptación tan renuente y suspicaz como la que desplegarían los actores corporativos del período, especialmente la CGT.

Lejos de confiar en la conducción “burguesa” de Perón y en el carácter policlasista que ofrecía el Movimiento Nacional Justicialista, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización armada de origen trotskista procedente del PRT, continuaría desarrollando acciones, aunque se encargaría de aclarar que no llevaría a cabo ataques “a las instituciones gubernamentales ni contra ningún miembro del gobierno del presidente Cámpora”.

Pero la cuestión de la “normalización institucional” debió afrontar un nuevo y tercer flanco de conflicto, más de orden social que político, que remitía a la amplia movilización social que había seguido casi de inmediato a la transmisión del mando, produciendo —como ha señalado Flavián Nievas— un rápido desborde de los canales institucionales existentes. Este proceso de movilización es ilustrado de manera paradigmática por las “tomas”, hechos de acción directa que llevaron a la ocupación de hospitales, escuelas, universidades, varias comunas del interior, diarios, canales de televisión, organismos oficiales, fábricas, inquilinatos, entre otros. Estas acciones no respondían a una conducción unificada e involucraban actores de variado tipo, desde individuos desarraigados hasta funcionarios de gobierno, desde activistas y simpatizantes del ala izquierda hasta, en algunos casos, militantes de la derecha peronista. Muchas eran realizadas en nombre de la lucha “anticontinuista”; otras, con el objetivo de desarrollar propaganda armada. La movilización alcanzó picos de verdadera insurrección; así, entre el 4 y el 15 de junio se produjeron casi 500 tomas de distinto tipo en todo el país y se han calculado unas 2.000 para el período de referencia.

Las tomas fueron muy difundidas por los órganos de prensa, muchos de los cuales no ocultaban el desagrado que les provocaba la inacción del gobierno. Aunque el ministro Righi había calificado a esos hechos como “saludables”, al considerarlos como efecto de la descompresión política, es claro que la situación habría de generar ambivalencias que prontamente se convirtieron en dilemas insostenibles. Las tomas marcaron entonces un primer punto de conflicto y, a la vez, de separación entre el peronismo en el poder y la sociedad movilizada. Por un lado, los actores intervinientes en las tomas coincidían en afirmar que el gobierno popular abría un nuevo período histórico. Así, sucedía que muchas de las ocupaciones se realizaban en nombre del gobierno popular y, en numerosos casos, con la genuina intención de fortalecerlo. Por otro lado, a través de ellas, comenzaban a advertirse notorias discrepancias acerca del contenido y del sentido que había que dar a la etapa que se abría. Diferencias percibidas con claridad, ya que muchos de los protagonistas de estos eventos, desde el ala izquierda, no podían traducirlas en términos claramente programáticos e institucionales. Por su parte, como hemos dicho, el gobierno, aun buscando a tientas la vía de la institucionalización, tenía un claro programa que era además una doctrina: el pacto social.

Los grandes actores corporativos no tardaron en manifestar su disconformidad respecto de las tomas. Por supuesto que la “tolerancia complaciente” del gobierno contribuyó a generalizar la imagen de descontrol y caos social que prontamente habría de reprocharse a la gestión de Cámpora. Tanto desde la izquierda como desde la derecha no serían pocos los que verían reforzada su convicción de que se hallaban frente una “situación prerrevolucionaria”. Sin embargo, la movilización fue desactivada. No es casual que la presión por terminar con la fase de efervescencia popular fuera mayor aquellos días en que se definía la firma del pacto social. Finalmente, el 14 de junio, el todavía secretario general del MNJ, Juan Abal Medina, utilizando la Cadena Nacional de Radiodifusión, exhortó a poner fin a las tomas. Dos días más tarde, la JP apoyaría el pedido, a través de un documento avalado por todas las regionales.

En suma, el rápido proceso de efervescencia ligado a las tomas, así como su forzada desactivación, constituyen sin duda

uno de los hechos centrales del período y tienden a marcar un nuevo movimiento, de separación en este caso, en la dinámica de la relación entre un sistema político en recomposición y la sociedad civil movilizadora.

El retorno de Perón

Con el peronismo en el gobierno, el operativo de retorno del líder estaba en marcha. Fue puesto en manos de una comisión especial en la cual operaban personajes oscuros de la derecha peronista como los ya nombrados Osinde y Norma Kennedy, además del propio secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. También estaban Lorenzo Miguel y Juan Abal Medina, aunque estos últimos tuvieron escasa participación. Por otro lado, estos preparativos hicieron cada vez más notoria la múltiple influencia del secretario de Perón y ministro de Bienestar Social, José López Rega. Ya en los últimos meses de la estancia de Perón en Madrid, la hegemonía de este personaje rasputinesco se había tornado indiscutible.

La JP y las agrupaciones armadas peronistas fueron marginadas de la organización del acto de recibimiento que se realizaría en Ezeiza. Pese a ello, sumergidos en una obsesión estadística que pronto se estrellaría contra la propia voluntad del líder, la conducción de Montoneros y de la JP colocó todo su empeño en la movilización de las bases, confiando en que esta demostración de fuerza les daría el lugar que les correspondía en el movimiento. Fue, sin lugar a dudas, la mayor concentración de la historia política argentina. Más de dos millones de personas, entre las cuales se encontraban interminables columnas de la JP, marcharon hasta el aeropuerto de Ezeiza, pero el encuentro gozoso con el líder no tendría lugar. Desde el palco, donde todavía podían verse algunos artistas, grupos de extrema derecha, que portaban armas largas y estaban bajo las órdenes de Osinde y Rucci, comenzaron a disparar contra la multitud. Pronto se desató la tragedia y la gente, en medio del terror y el desconcierto, comenzó a dispersarse y a retroceder, buscando amparo entre los árboles o en los edificios allende el aeropuerto. Las estadísticas finales dan cuenta de trece muertos y trescientos ochenta heridos. Algunos asistentes fueron



Manifestantes se dirigen a Ezeiza en ocasión del regreso de Perón, 20-6-1973.

atrapados y torturados en el Hotel Internacional por grupos que, por su accionar e ideología, anticipaban la Triple A. Finalmente, el avión que transportaba a Perón aterrizó en el aeródromo de Morón.

Al día siguiente, un Perón “desencarnado” pronunciaría un contundente discurso en el cual, omitiendo cualquier referencia directa a los hechos de Ezeiza, realizaba un llamado a “volver al orden legal y constitucional, como única garantía de libertad y de justicia”.

Detengamos el relato un instante porque la inflexión es de magnitud. En la práctica política del líder, el Movimiento Nacional Justicialista era, sobre todo, el arte de la contradicción discursiva. En efecto, con el correr de los años y las generaciones, el discurso de Perón fue transformándose en una especie de libro sagrado en cuyas páginas siempre era posible hallar, para una misma pregunta, dos sentencias diferentes, generalmente contradictorias entre sí. Tanto la izquierda como la de-

recha del movimiento habían sabido explotar esta característica propia del discurso populista, para autenticar sus posiciones y proceder a la descalificación del otro. Sin embargo, hasta ese momento, la Juventud no se había visto obligada a realizar una sobreinterpretación de sus palabras; sólo se había limitado a glosar una parte del discurso del líder, aunque a veces buscara explicitar lo que la palabra sugería o tratara de unir lo que otros separaban, amplificando los nexos entre los temas que atravesaban los debates de la época, como aquél entre “el socialismo” y “lo nacional”.

Lo novedoso aquí es que Perón, un día después de su retorno definitivo, se despojó de toda ambigüedad y estableció un corte, cuya sustancia difería sensiblemente de aquel que esperaban los sectores juveniles y las organizaciones armadas peronistas. Y por mucho que éstos tardaran en reconocer las consecuencias del final del doble discurso, una cascada de hechos, cada vez más convalidados por las diáfanos palabras de Perón,



Palco del acto en Ezeiza, 20-6-1973.

Perón impugna a los sectores radicalizados, 21 de junio de 1973

“No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las veinte verdades peronistas dicen. No es gritando ‘la vida por Perón’ que se hace Patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos.

“Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias. Los que pretextan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos o se empeñen en peleas descabelladas, no pueden engañar a nadie (...)

“Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el Pueblo ha reconquistado, se equivocan (...)

“A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento.”

Fuente: J. D. Perón, *Discursos y mensajes del teniente general J. D. Perón, junio a octubre de 1973*, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y Difusión.

se encargaría de desmentir el tortuoso ejercicio de sobreinterpretación al cual se verían librados.

Por otro lado, con Perón presente en el país, pronto el gobierno de Cámpora se tornaría insostenible. A los sucesivos desaires del líder, se agregarían las crecientes presiones provenientes del sector que lideraba López Rega. La crisis desembocaría con la renuncia de Cámpora y del vicepresidente Vicente Solano Lima, el 12 de julio. Una maniobra poco prolija habilitó a Raúl Lastiri, entonces presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega, a reemplazar a Cámpora. La transición estaba en marcha. Pronto Perón volvería a calzarse nuevamente la banda presidencial.



El presidente Juan D. Perón junto a los dirigentes sindicales Adelino Romero, Lorenzo Miguel y Casildo Herreras, agosto de 1977.

vamente un llamado al sacrificio, el que, en todo caso, se realizaba menos en nombre del modelo nacional-popular que de la disciplina y la lealtad, las dos virtudes cardinales del justicialismo, pues el regreso definitivo de Perón estuvo marcado por un viraje en la política interna del movimiento. En el plano simbólico, pronto se destacó el reconocimiento de Perón hacia los “viejos peronistas”, a quienes había denostado hasta hacía poco tiempo y que de ahora en más no cesaría de elogiar, contraponiéndolos respecto de la “muchachada apresurada”. También aparecía en la reafirmación de la clase trabajadora organizada como “columna vertebral del movimiento”. En suma, este giro hacia la derecha, anunciado en los últimos meses, fue interpretado por los sectores del sindicalismo burocrático como una expresión de la voluntad del líder de *volver a poner las cosas en su lugar*.

Por otra parte, la burocracia sindical mantenía graves conflictos con las corrientes del sindicalismo combativo que, en nombre del basismo y de la autonomía sindical, fomentaban formas de acción clasistas. Este tipo de sindicalismo era representado de manera ejemplar por los cordobeses Agustín Tosco (Sindicato de Luz y Fuerza) y René Salamanca (SMATA). En este frente de conflicto, Perón, que no compartía la tolerancia que había caracterizado al gobierno de Cámpora, se dispuso a apoyar a la ortodoxia sindical, para lo cual impuso una política de control y represión de los conflictos intrasindicales. Expresión de esto fue la nueva Ley de Asociaciones Profesionales (ley 14.455), aprobada en enero de 1974, que aseguraba el monopolio de la representación a las estructuras de mayor agregación, en detrimento de aquellas descentralizadas, de implantación local e independientes de la conducción de la CGT. Más simple, el encuadramiento del sindicalismo peronista, suerte de revalidación de la antigua alianza, se tradujo en beneficios tangibles de diverso orden.

Pero la esperada firma del pacto social no se tradujo en una disminución de la conflictividad social. Si las demandas de aumento salarial decrecieron, todavía quedaban vigentes otras reivindicaciones que portaban sobre las condiciones de trabajo y la democratización sindical. Por otro lado, pese a que Perón había anunciado la ejecución de un Plan Trienal y afirmaba haber controlado la inflación, en los primeros meses de 1974 el pacto social sufrió un primer revés cuando los empresarios renunciaron a absorber el costo de la inflación importada por la crisis internacional del petróleo. A esta falta de confianza en el modelo instrumentado, se sumó el reclamo de los sindicatos que, presionados por las bases frente a la caída del salario real, exigieron un aumento salarial en relación con el incremento de los precios. En marzo de 1974, Perón llamó a una Gran Paritaria, en la cual actuó como mediador, debido al desacuerdo existente entre las organizaciones sindicales y el empresariado. Los sindicatos obtuvieron así un aumento salarial del 13%, pero los empresarios hicieron caso omiso del límite expresamente autorizado por el ministerio y trasladaron el incremento salarial a los precios. Además, la economía populista era asolada no sólo por la inflación y la creciente puja intersectorial, sino también por el desabastecimiento de productos básicos y el desarrollo del mercado negro.

El último discurso público de Perón, pronunciado el 12 de junio, debe haber sonado a amarga despedida en los oídos de la dirigencia sindical, atenazada cada vez más entre el dilema de la lealtad y las demandas de un sindicalismo reivindicativo. En su tradicional lenguaje de guerra, Perón los trató de “minorías irresponsables”, acusándolos de “sabotear la reconstrucción nacional”, de no respetar el acuerdo, pese a haber concertado en dos oportunidades (en junio del 73 y, con la Gran Paritaria, en marzo del 74). Por último, el 17 de junio, en una alocución mantenida en Casa de Gobierno, Perón exhortó nuevamente a los representantes de la CGT a no romper el pacto social y prometió el pago de un aguinaldo completo para julio de ese año.

El cerco a la izquierda: las palabras y los hechos

Las dificultades que tuvo que afrontar el tercer gobierno de Perón se desplegaban en más de una escena. Una vez lograda la concertación social, desactivada la ola de ocupaciones y asegurada la transición en manos de Lastiri, el propio Perón se encargaría de imprimir un giro radical a su relación con los representantes de la Tendencia. Así, el discurso en torno a la necesidad de la “institucionalización” estaba orientado en gran parte contra el ala rebelde del movimiento. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la posición asumida por el líder implicaba un viraje mayor, pues por primera vez en la historia del movimiento justicialista, antes que proponer una integración, que sabía de antemano forzada, Perón apuntaba a la abierta exclusión de toda una corriente interna.

Este desencuentro con el líder sería, para muchos militantes de izquierda, política y existencialmente, dramático. En realidad, la primera gran tragedia del peronismo se jugó aquí, entre estos militantes desgarrados entre su adhesión a Perón, que contradecía abiertamente sus aspiraciones y renegaba de ellos, y la voluntad siempre actual de radicalizar el peronismo. La historia de este desencuentro puede seguirse paso a paso a través de los discursos del propio Perón: primero aparecen las advertencias, deslizadas en tono edificante; luego una incontenible serie de descalificaciones (“idiotas útiles”, “infiltrados”) acompañada del efectivo proceso de exclusión de la izquierda

peronista del espacio político. Por último, sobrevino la abierta y escandalosa ruptura.

El primer discurso de Perón, luego de los sucesos de Ezeiza, estampó con todas las letras el reconocimiento a las organizaciones sindicales y a los viejos militantes peronistas. Por vez primera, Perón situó también a la izquierda peronista en el lugar de “enemigos embozados, encubiertos o disimulados”. Por último, se encargó de aclarar la verdadera concepción del justicialismo: “Somos lo que las 20 verdades justicialistas dicen”.

A esta primera redefinición del campo político-ideológico, las fuerzas nucleadas en la Tendencia habrían de responder, en primer lugar, con la *teoría del cerco*, suerte de lectura conspirativa que pretendía no responsabilizar al líder, colocando el centro de las verdaderas decisiones fuera de éste. La teoría del cerco ofrecía dos versiones que, aunque complementarias, deben ser diferenciadas: la primera era la versión “mágica”, que



José López Rega entrega juguetes en Olivos, 6-1-1974.

El distanciamiento montonero

“Ayer éramos los ‘muchachos’ y éramos saludados por el Jefe del Movimiento con emoción por nuestra lucha, se honraban nuestros muertos y ahora, por ser como Perón dijo que tenían que ser los peronistas, por advertir que la lucha aún no ha terminado, que no tenemos todo el poder, que hay que trabajar para conseguirlo, que hay que organizarse y no ceder, por eso ahora nos señalan que hay otros partidos ‘socialistas’. ¿Por qué no nos dijeron antes, cuando peleábamos, que nos pasaríamos a otro partido? ¿Dónde estaban estos que nos tirotean y que preparan los atentados para eliminarnos cuando había que pelear contra Lanusse?”

Fuente: Dardo Cabo, *El Descamisado*, 12-2-1974.

identificaba al “entorno” y más precisamente al “brujo López Rega” como el verdadero responsable de las desacertadas decisiones que iría adoptando Perón. La segunda era la versión “ideológica”, que señalaba como último responsable de los acontecimientos al imperialismo, en consonancia con el “cerco internacional” de militares recientemente instalados en países limítrofes. Esta última lectura de que el cerco se venía tendiendo sobre diferentes naciones latinoamericanas cobraría mayor fuerza después de la caída de Allende en Chile, ocurrida en septiembre de 1973.

Los hechos se fueron sucediendo con celeridad. Un mes después de la masacre de Ezeiza, Montoneros organizó una movilización hasta la residencia de Gaspar Campos, donde se alojaba Perón. Esa marcha, en la cual participaron unos 80 mil jóvenes de la JP, se proponía algo más que el restablecimiento de los canales de comunicación directos con el líder (romper “el cerco”). En realidad, a través de una demostración palmaria del poder de movilización, el objetivo final no era otro que el de presionar a Perón y recuperar así una posición de fuerza. Un Perón sonriente se encargó de recibir sólo a cuatro de los dirigentes de la JP, luego de desairarlos en Gaspar Campos, y obligarlos a marchar hasta la residencia de Olivos. Perón posó para las fotos y se comprometió a mantener un contacto directo y fluido con la JP. Sin embargo, aun antes de finalizada la

desconcentración, los dirigentes de la JP se enteraron por la agencia oficial Télam de que el mismísimo López Rega acababa de ser designado como mediador entre Perón y la Juventud.

No obstante, como lo avalan ciertos “documentos de coyuntura” de las organizaciones peronistas, el desencuentro con Perón suscitó una interpretación más realista y crítica del proceso político en curso, en la cual se subrayaba el “carácter mágico” y la inexistencia del cerco. Este reconocimiento los llevaría a afirmar que “Perón nos ofrece como prenda de negociación. Sus negociaciones para lograr la unidad nacional y sus negociaciones con el imperialismo tienen como elemento de entrega, de ‘buena voluntad’, a nosotros”.

Por último, todos los esfuerzos interpretativos se vieron acompañados por *la afirmación de la legitimidad y del carácter peronista de las acciones de la Tendencia*. Dicho de otro modo, de las declaraciones y de las demostraciones de fuerza resulta claro que no habría renuncia ni podía haber expulsión. En fin, la inminencia de la ruptura aceleró el proceso de las identificaciones a partir del cual la Tendencia, especialmente a través de Montoneros, buscaría presentarse como el auténtico representante del pueblo.

El 23 de septiembre la fórmula que llevaba a Perón como presidente y a su esposa Isabel como vicepresidenta obtuvo el 62% de los votos. Dos días después, el grupo Montoneros ase-

Discurso de Mario Firmenich en la cancha de Atlanta, 11 de marzo de 1974

“Habría que discutir qué es el peronismo, a ver si se puede echar a alguien del peronismo. Porque puede suceder que nadie pueda entrar al peronismo, pero irse es un poco más difícil. Lo que ocurre es que el peronismo no es un simple partido liberal, ni un sindicato; es el Movimiento que, como tal, está más allá del sistema. Es un movimiento que es el pueblo mismo, con su identidad política, es el nacionalismo popular, que es necesariamente revolucionario y ha sido consecuentemente revolucionario.”

Fuente: R. Baschetti, *Documentos, 1973-1976*, vol. 1, p. 560
(destacado en el texto).

sinó a Rucci, secretario general de la CGT, asestando así un duro golpe al propio Perón, en lo que no podía ser leído sino como una suerte de “chantaje político”. Al decir del poeta Juan Gelman, fue como “tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa”...

En octubre de ese mismo año también se llevó a cabo el Operativo Dorrego, una acción civil entablada por las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Jorge Carcagno, junto con la JP y Montoneros, en favor de sectores perjudicados por las inundaciones. El hecho sirvió para reavivar —fugazmente— las expectativas de una posible alianza entre el pueblo y el Ejército. Sin embargo, como sostiene Rouquié, luego de la asunción de Perón, el general Carcagno, representante del “profesionalismo comprometido”, sería reemplazado por aquellas posiciones identificadas con el “profesionalismo neutral”.

El viraje de Perón tendría su correlato en una acelerada purga ideológica, que marcaría el eclipse de la Tendencia en varios frentes, comenzando por el ala político-institucional. Esto ocurriría durante el agitado verano de 1974. Los primeros afectados fueron los diputados peronistas ligados a la Tendencia, quienes se vieron obligados a renunciar a sus bancas, después de mantener una tensa conversación con Perón, en la que manifestaron su rechazo a tres medidas que propiciaba la Cámara de Diputados (también condenadas por la JP): la ya citada Ley de Asociaciones Profesionales; la Ley de Prescindibilidad, cuya amplia aplicación permitía convertirla en un arma de disciplinamiento político, y la ley de reforma del Código Penal, que denunciaban por su carácter indiscriminado, pues diluía peligrosamente la frontera entre el delito y el accionar de cualquier organización no reconocida legalmente. Pese a la renuncia, dichos diputados fueron expulsados del Movimiento Peronista.

El 20 de enero de 1974, un importante hecho de violencia vino a operar un nuevo giro, cuando el ERP atacó el Regimiento de Azul, y terminó con la vida, entre otros, del jefe de la unidad militar. Perón, vestido con uniforme militar, se encargó de repudiar el hecho, al tiempo que aprovechó el golpe para responsabilizar al gobernador bonaerense Oscar Bidegain, a quien acusó de haber asumido una actitud desaprensiva. Bidegain fue desplazado y en su lugar quedó el vicegoberna-



Obregón Cano durante una conferencia de prensa, 1974.

dor, un hombre del riñón del sindicalismo vandonista, Victorio Calabró. El hecho sirvió también para endurecer la posición del gobierno en relación con el conjunto de leyes represivas que estaban siendo tratadas por el Parlamento, al tiempo que dio la posibilidad a Perón de iniciar una política de reconciliación con el Ejército. No había pasado un mes cuando el jefe de la policía cordobesa, teniente coronel Navarro, se rebeló contra el poder civil y derrocó al gobernador Obregón Cano. A pesar de que las autoridades nacionales condenaron el Navarrazo, la intervención federal que finalmente le siguió no buscó restituir en sus fun-

ciones a los gobernantes desplazados.

La purga también alcanzó tempranamente a la Universidad de Buenos Aires, considerada un bastión de la izquierda peronista, cuando en octubre de 1973 el ministro de Educación Jorge Taiana pidió la renuncia del rector Rodolfo Puiggrós, uno de los representantes históricos del revisionismo populista de izquierda.

En suma, el ala política era desplazada de los puestos de gobierno, reduciendo de manera significativa los frentes de lucha. Mientras tanto, la agrupación Montoneros, que había logrado integrar otras organizaciones armadas peronistas, buscaba evitar la confirmación de la ruptura, renovando a través de las declaraciones su compromiso con el movimiento peronista. Finalmente, el 11 de marzo, en un acto realizado en Atlanta, la conducción nacional de Montoneros caracterizó *“la traición del gobierno”* en dos planos, el político (ilustrado por la remoción de los gobernadores afines) y el económico (el pacto social). Por último, convocó a los militantes a un encuentro con el líder para el 1º de mayo. “Allí debemos llenar la Plaza

—decía Firmenich— para decirle al general lo que pensamos, todo lo que discutimos continuamente en nuestros lugares de trabajo. Todo el esfuerzo de reencauzamiento de este proceso, y así seguiremos siendo fieles a nuestra consigna de que viviremos *libres o muertos pero jamás esclavos*, y que con todo lo que significa gritaremos hasta el final *¡Perón o Muerte! ¡Viva la Patria!*”

Volvamos un instante sobre la significación que tuvo para Montoneros y, de manera más general, para la Juventud Peronista esta apelación al diálogo como último recurso antes de la ruptura final. Es innegable que el “diálogo directo” entre el líder y las masas constituía uno de los núcleos centrales del imaginario peronista, pues remitía al hito fundador del movimiento, el 17 de octubre de 1945, cuando las masas reunidas en la Plaza de Mayo reclamaron la vuelta del coronel de los trabajadores, sellando en un corto diálogo lo que sería sin duda el inicio de una alianza perdurable. El calendario peronista instituyó luego la fiesta del 1º de mayo como la fecha en que el pueblo y el líder “dialogaban” y renovaban así su compromiso. Sin embargo, el diálogo había sido también uno de los ejes del imaginario de la relación con Eva Perón, modelo ejemplar de la izquierda peronista. ¿Acaso, entre los militantes, alguien podía olvidar aquel largo, sufrido y dialogado acto de renunciamiento de Evita a la vicepresidencia en 1951, que no tuvo como escenario central la Plaza de Mayo, sino un palco levantado por la CGT en la avenida 9 de Julio? Así, su sola evocación traía al recuerdo de que, en la historia del peronismo, no todos los “diálogos” habían alcanzado la forma ritualizada de un reencuentro feliz entre el líder y las masas.

Ahora bien, en los '70, la reivindicación del diálogo como modalidad fundacional del vínculo entre Perón y el pueblo encontraba afinidad con una serie de prácticas constitutivas de la experiencia política de la JP, como lo muestran paradigmáticamente los actos políticos de la época, en los cuales era habitual que los oradores fueran interrumpidos por algún participante o por la multitud para corear una consigna determinada. La revista *El Descamisado*, el órgano de Montoneros, se había encargado de ilustrar lo esencial de la dinámica de relación, utilizando la estructura del “diálogo” a la hora de reproducir los discursos de sus dirigentes.

Esto aparece asociado también a la centralidad que la Tendencia otorgaba a las movilizaciones populares, reforzada por la “obsesión estadística” que atraviesa la época, como si el triunfo de una estrategia política dependiera, en gran parte, de la cantidad de columnas movilizadas. En otros términos, el papel ejercido por la Tendencia en las movilizaciones potenció aquella imagen de poderío en la cual convergían recursivamente el afán de protagonismo y la arrogancia juvenil. Ensordecidos por el cántico de sus propias consignas, no quisieron o no pudieron interpretar uno de los apotegmas centrales del ideario peronista, que el propio Perón desarrolló en los cursos que dictó en la Escuela Superior Peronista en 1949 y que fue repetido hasta el hartazgo en los tempranos setenta: “Las masas no valen ni por el número ni por la capacidad de sus componentes: valen por la clase de dirigentes que tienen a su frente”.

El encuentro decisivo tendría lugar el 1º de mayo en la histórica plaza, ocasión en la cual el pueblo, representado por la JP y Montoneros, “dialogaría” con el líder. Ese día, las pancartas de Montoneros ocuparon los lugares estratégicos frente a los balcones de la Casa Rosada. El cortejo que acompañaba a Perón, entre los que se destacaban su esposa Isabel y el ministro de Bienestar Social, fue recibido con hostilidad por la multitudinaria juventud, estimada en unas cincuenta mil personas, que comenzó a corear: “Qué pasa, qué pasa, General/ que está lleno de gorilas/ el gobierno popular”; “Se va acabar, se va a acabar/ la burocracia sindical”. En uno de los discursos más breves que se le conocen, un Perón desencajado tildó a la multitud vociferante de “imberbes” y “estúpidos”. Como respuesta, las columnas de la JP comenzaron a abandonar la plaza al canto de “Conformes, conformes, General/ conformes los gorilas, el pueblo va a luchar” y “Aserrín, aserrán/ es el pueblo que se va”. El desencuentro marcó la consumación de la ruptura. Sucedió en la histórica plaza, ahí donde Montoneros, como afirman Sigal y Verón, “buscó articular la palabra pero Perón no escuchó sino gritos”.

Poco después, Montoneros registró un desprendimiento importante, la autodenominada JP Lealtad, que postulaba el acatamiento al líder. El 25 de mayo de 1974 Perón disolvía por decreto la rama juvenil del Partido Justicialista.

La cultura, entre la “y” y la “o”

El viraje derechista del gobierno iba inficionando todos los niveles. En abril de 1974, Perón designó al comisario Alberto Villar al frente de la Policía Federal. Un mes más tarde, se otorgó al ministro López Rega, entonces cabo, el grado máximo de la fuerza, el de comisario general, saltando doce grados en el escalafón. Así, el breve gobierno de Perón abrió el camino para la generalización de una serie de procedimientos autoritarios que irían desde el cierre de publicaciones políticas y culturales de izquierda hasta la abierta censura en los medios de comunicación y la confección de listas negras dentro del ámbito artístico, una de las características más notorias del gobierno isabelino. Esos procedimientos que combinaban, de manera singular, la acción policial con la parapolicial de los grupos de extrema derecha, enquistados en el gobierno, aparecían ligados al núcleo de poder del ministro de Bienestar Social.

En el campo de la cultura, el giro a la derecha comenzó a traducirse en inquietantes señales. Época en la cual una profusión de manifestaciones proyectaban en el centro del debate ideológico las posibles articulaciones entre la “Patria Socialista” y la “Patria Peronista”, colocando el acento en la distancia instalada entre la conjunción (la “y”) y la oposición (la “o”).

A fin de ilustrar el “clima de época”, pasaremos revista al diario *La Opinión*, dirigido por el periodista Jacobo Timerman, quien supo combinar de manera magistral el oportunismo político con el eclecticismo cultural-ideológico. Una breve ojeada sobre el caliente mes de enero de 1974 refleja la centralidad que los temas ligados a “lo social” y “lo nacional” tenían en la cultura de la época. Así, el 3 de enero de 1974 *La Opinión* anunciaba el estreno de *Ceremonia*, “una insólita realización argentina” de Néstor Lescovich, donde “el ojo impúdico de la cámara” registraba a marginales en distintas situaciones, que habían aceptado ser filmados a cambio de algo de comida y de vino. El Teatro Municipal General San Martín programó en la sala Lugones un ciclo “de corte humanista y cristiano como contribución a la reconstrucción del ser nacional”, con la proyección de filmes como *Don Segundo Sombra*, de Manuel Antín; *Güemes*, de Leopoldo Torre Nilsson, y *Juan Moreira*, de Leonardo Favio.

Ese mismo año se proyectarían más de treinta filmes de pronunciado corte político-ideológico, entre ellos, *La hora de los hornos*, de Fernando Solanas y Octavio Getino (que sería visto por unos 300 mil espectadores, entre 1968 y 1973); *Operación Masacre*, basado en el libro de Rodolfo Walsh; *Voto más fusil*, del chileno Helvio Soto; *Estado de sitio*, de Costa-Gavras, y *Amor y anarquía*, de Lina Wertmüller.

Uno de los artículos centrales del suplemento cultural de *La Opinión*, del 13 de enero, estaba dedicado al tema “la guerra de las consignas”. Firmado por Alberto Szpunberg, allí se afirmaba que “la consigna justa tiene la fuerza del grito —de dolor o de victoria— y simultáneamente la estrictez de una orden”. El autor recordaba también que “la P encimada sobre la V bastaron para identificar y expresar a millones de argentinos” las diferentes ofertas ideológicas existentes en la época. En la misma página, el ensayista Ernesto Goldar anunciaba un libro sobre “la descolonización ideológica”, donde respondía a la cuestión de “si se puede ser peronista y marxista o hay que ser peronista o marxista”. Un tal R. Ferrero explicaba en un libro sin sello editorial que, aun en sus manifestaciones de izquierda, el sionismo estaba supeditado al imperialismo. En la misma página, a la derecha, se publicitaban dos libros de Perón. En fin, editorial Corregidor anunciaba la salida del que sería el primer libro de Osvaldo Soriano, *Triste, solitario y final*. En la contratapa del suplemento de cultura de *La Opinión* se reproducía un artículo del Herbert Marcuse, cuya obra aparecía indisociablemente ligada a la revuelta que había conmovido los cimientos políticos y culturales de la sociedad francesa en mayo de 1968. El título, “Para terminar con el capitalismo”, era más que elocuente.

El diario de esa semana consignaba también que el 8 de enero la policía había secuestrado libros de autores argentinos y detenido a varios librereros y empleados de la calle Corrientes. Sin contar con una orden judicial que autorizara el allanamiento, el mismo había sido llevado a cabo por la “sección de Moralidad” de la Policía Federal, que dirigía el comisario Luis Margaride, el mismo que había ocupado ese cargo en los tiempos de Onganía. Pero no sólo sorprendía la ausencia de instancias legales o los residuos autoritarios que el gobierno había “heredado”. Este nuevo atentado contra la libertad de expre-

sión recordaba, sospechosamente, aquel otro realizado contra el Teatro Argentino, cuando se ensayaba la versión teatral del filme *Jesucristo Superstar*, controvertida recreación artística de la vida de Jesús. El 31 de diciembre de 1973, recordaba siempre el mismo diario, seis sujetos habían sido aprehendidos mientras trataban de entrar en las oficinas de Cinema Internacional, distribuidora del citado filme, a la cual denunciaban como un producto de “una confabulación judía”.

En tono de sorna, en un sugestivo artículo aparecido por esos mismos días en *La Opinión*, Aída Bortnik reflexionaba sobre la proliferación de revistas políticas, deslizándose que aquellas de extrema derecha, como *Cabildo* y *El Caudillo* (que pronto serían vinculadas al accionar parapolicial de la Triple A), habían conseguido una repercusión inesperada entre aquellos que la consumían “como publicación humorística”...

EL TERCER MOMENTO: LA DISOLUCIÓN ISABELINA

Juan Domingo Perón murió el 1º de julio de 1974. Durante treinta años, su liderazgo marcó la historia política argentina con un fuerte sello personalista. Su muerte no podía sino causar una honda conmoción en todo el país. A la hora de despedir sus restos mortales, Ricardo Balbín, el máximo dirigente de la UCR y eterno rival del Justicialismo, manifestó con sentido dolor: “Este viejo adversario hoy despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le digo, señora presidenta de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir a la permanencia de las instituciones argentinas, que usted simboliza en esta hora”.

Las palabras de Balbín aparecían como el corolario lógico de una política conciliatoria que desde principios de los años '70 Perón había venido desarrollando “hacia fuera”. En efecto, a diferencia de sus dos primeros gobiernos, caracterizados por una política basada en la acentuación de los antagonismos, en esta oportunidad Perón había buscado apoyo institucional, sobre todo en el líder de la UCR. Dicha política se había plasmado en la frase “para un argentino, no hay nada mejor que otro

argentino”, que había corregido y reemplazado a aquella máxima célebre “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Los motivos del acercamiento entre Perón y Balbín no eran ajenos al momento que atravesaba el movimiento justicialista, cuyas divisiones amenazaban con quebrar el frágil equilibrio tensional impuesto y apenas controlado por el propio Perón. En este sentido, el consumado líder era consciente de cuán oportuno y valioso podía ser el apoyo de aliados externos. Sin embargo, pese a que Perón y Balbín coincidían en la demanda de normalización del sistema político argentino, ambos diferían sensiblemente en su concepción de la acción política. Balbín era un hombre fiel a las clásicas formas de representación partidaria y, por ende, a los límites impuestos por las estructuras. En cambio, Perón era un líder populista, acostum-



Velatorio de Juan D. Perón, julio de 1974.

brado a una modalidad específica de ejercicio del poder, caracterizada por el equilibrio tensional. En labios de Perón, la demanda de gobernabilidad significaba, como no podían desconocerlo los diferentes componentes del movimiento peronista, en última instancia, el pliegue de los actores a la voluntad del líder.

Además, nadie ignoraba el alcance devastador que podía tener la escalada de la violencia en el interior del peronismo, ya que éste ocupaba la casi totalidad de campo político argentino. En fin, la oportuna reconciliación llegó a alimentar la idea de que Perón compartiera la fórmula presidencial con Balbín para las elecciones de septiembre de 1973, hecho que quizás hubiese coadyuvado al fortalecimiento del desvalido sistema institucional argentino. Sin embargo, Perón impuso a su segunda esposa como candidata a la vicepresidencia, reservando para sí el papel de garante del frágil orden instituido.

Por otro lado, pese a una breve gestión que convalidó el rol de la derecha, tanto como marcó la ruptura con la izquierda, Perón terminó por nombrar como único heredero, en su último discurso, al “pueblo”. Tras su muerte, nada ni nadie podría detener la lucha desatada en las diferentes escenas, a fin de apropiarse del poder y arrogarse de ese modo el monopolio de la representación del “pueblo”.

Isabel Perón asumió la jefatura del Estado, entrando así al libro de los récords, al convertirse en la primera mujer en el mundo en ejercer constitucionalmente el mandato supremo de un país. El panorama que se abría frente a ella aparecía cargado de incertidumbre. Un rápido balance de la inconclusa gestión de Perón arrojaba un cúmulo de asignaturas pendientes, entre las que se contaba el pacto social, cada vez más tambaleante, en un clima de creciente conflictividad social y violencia política. El gobierno de Isabel acentuó estas líneas, al tiempo que impulsó una inflexión importante en términos político-económicos. En efecto, su política apuntó a la consolidación de un proyecto ultramontano, que preveía no sólo la exterminación total del ala izquierdista sino también la disolución del modelo nacional-popular, mediante la subordinación del histórico actor del modelo peronista, el poder sindical.

La figura que encarnó uno de los proyectos de la extrema derecha, José López Rega, fue uno de los personajes más oscu-



La presidenta Isabel Martínez de Perón con Jorge Rafael Videla.

ros y siniestros de la política argentina de todos los tiempos. Durante años, alternó sus funciones de policía, de la que sólo llegó a tener el grado de cabo, con una dedicación cada vez mayor a las ciencias ocultas. En 1965, tuvo su primer encuentro con Isabel Perón, en ocasión del viaje que ésta realizara a la Argentina como mensajera de Perón. Poco después, el “Brujo”, o simplemente “Lopecito”, como lo apodaba socarronamente Perón, desembarcó en Madrid, en la quinta Puerta de Hierro, acumulando funciones cada vez más influyentes, desde el rol de mayordomo hasta el de secretario personal. “El Rasputín de las Pampas” supo aprovechar los espacios que el propio liderazgo de Perón le fue cediendo en el exilio, cuyo personalismo apareció potenciado a la hora de su declive físico. En efecto, si algo caracterizó a López Rega fue su habilidad para construir una suerte de poder detrás de un núcleo de poder ya personalizado.

Durante el gobierno de Isabel Perón, López Rega —convertido en virtual primer ministro, después de que su cargo como secretario presidencial adquirió, por decreto de principios de 1975, rango ministerial— no vaciló en utilizar metodologías propias del terrorismo de Estado. Él fue el creador y sostenedor de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización clandestina en la cual actuaban elementos policiales y parapoliciales, cuyo objetivo era la eliminación física de sus adversarios a través del asesinato político. Para esos días, *El Caudillo*, órgano vinculado a la Triple A, exclamaba que “el mejor enemigo es el enemigo muerto”. La primera aparición pública de la Triple A tuvo lugar en noviembre de 1973, cuando una bomba estalló en el auto del senador por la UCR, Hipólito Solari Irigoyen, quien sobrevivió pese a las graves heridas. Su modus operandi incluía el asesinato selectivo o masivo, la colocación de bombas a locales partidarios, la amenaza pública de muerte a través de la divulgación de listas. Sus víctimas fueron militantes, políticos, intelectuales, artistas, sindicalistas, periodistas, entre ellos el diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote tercermundista Carlos Mugica, el intelectual Silvio Frondizi, hermano del ex presidente, o el anteriormente vicegobernador de Córdoba, Atilio López. Según cifras de la CONADEP, la Triple A fue responsable de 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975.

El período trajo consigo el golpe de gracia para la izquierda peronista. Así, en una última tentativa por salir de su creciente aislamiento, sectores allegados a la Tendencia impulsaron la apertura de un frente político a través de la creación del Partido Auténtico, que participó de las elecciones provinciales en Misiones. Sin embargo, poco después de su conformación, los representantes del Partido Auténtico fueron expulsados del Movimiento Justicialista. En el orden sindical, la política de Isabel supuso también altos niveles de represión, como lo prueba el conflicto protagonizado por la seccional metalúrgica de Villa Constitución, encabezada por Alberto Piccinini, a raíz de las huelgas desatadas en tres fábricas importantes, Acindar, Marathon y Metcon. Este conflicto, cuyas dimensiones superaban ampliamente la cuestión intrasindical, sería resuelto por la intervención de las fuerzas policiales en 1975, a la que seguiría una cruenta represión y el encarcelamiento de los principales dirigentes.

Por otro lado, el autoritarismo gubernamental apuntó al cierre de los canales institucionales a través del ejercicio sistemático de la censura, cuyo blanco predilecto fueron los medios de comunicación. La depuración ideológica alcanzó los claustros académicos, mediante el nombramiento de Alberto Ottalagano como interventor en la Universidad de Buenos Aires. En defensa del verdadero justicialismo, este personaje octogenario y admirador de Hitler asumió una cruzada en “contra del marxismo”.

En definitiva, en su avanzada represiva, la extrema derecha apuntaba a ampliar su poder, desequilibrando las relaciones existentes en el interior del régimen populista. Pero a esa altura de los acontecimientos, su mayor adversario no era la izquierda política o cultural, la que, sin mayores posibilidades de desarrollar actividades legales, se hallaba cada vez más



Acto sindical presidido por René Salamanca, Alberto Piccinini y Agustín Tosco, 1974.

acorrallada entre la opción del repliegue o el lanzamiento a la lucha armada. El gran adversario que restaba en pie era el sindicalismo peronista, la histórica columna vertebral, otro de los beneficiados por las nuevas condiciones políticas.

Nuevas querellas internas

Desde el comienzo del tercer gobierno justicialista, los sindicatos peronistas conducidos por los representantes “duros” de las 62 Organizaciones habían obtenido una serie de triunfos que volvieron a confirmar todo su poder. Además de neutralizar los conflictos intrasindicales, mediante la exclusión de los dirigentes del sindicalismo antiburocrático y de izquierda, apoyaron el desplazamiento de los últimos gobernadores ligados a la Tendencia, como Alberto Martínez Baca en Mendoza, Jorge Cepernic en Santa Cruz y Miguel Ragone en Salta.

Después de la muerte de Perón, la cúpula sindical peronista decidió también arremeter contra el autor del pacto social, el ministro de Economía, José Ber Gelbard, socavando su debilitada autoridad. Los avatares de esta confrontación pusieron en evidencia, como señala Juan Carlos Torre, “hasta dónde podía llegar el sindicalismo peronista en la lucha interna por el poder”. Para ello, no vaciló en desconocer uno de los ejes centrales del programa reformista, pese a que poco tiempo después le tocaría defenderlo, en el momento de enfrentar la sorpresiva embestida oficial encabezada por López Rega.

Así, a la hora de profundizar un plan económico, Gelbard se quedó sin fuertes apoyos políticos. La situación se tornó insostenible cuando el ministro encaró una nueva fase del programa económico, que incluía la reglamentación de las inversiones extranjeras, una parcial nacionalización del comercio exterior y una ley agraria, que apuntaba a lograr un incremento de la productividad en el campo. El detonante que causó su definitivo alejamiento fue la prematura divulgación del anteproyecto de ley agraria, que dictaminaba en uno de sus puntos la pérdida del dominio de las tierras incultas o improductivas. Como era de esperar, este proyecto de ley contó con el repudio de la Sociedad Rural, que no vaciló en hablar de proyecto de “expropiación”, al tiempo que obtuvo un primer respaldo de la CGT.

Sin embargo, de manera sorpresiva, a mediados de octubre de 1975, la CGT declaró que apoyaba la iniciativa oficial, pero no avalaba el anteproyecto difundido por la prensa. Sin el apoyo de los sindicatos, el proyecto de Gelbard quedaba a merced de las presiones de los grandes propietarios. Finalmente, el proyecto fue abandonado y hacia fines de ese mismo mes Gelbard presentó la renuncia, luego del anuncio de la presidenta de una nueva convocatoria a paritarias. Alfredo Gómez Morales, un prestigioso economista proveniente de las filas del peronismo histórico, lo reemplazaría.

El último conflicto intraperonista enfrentó a los gremialistas con la figura todopoderosa de José López Rega. Ciertamente es que las fricciones habían comenzado desde el día mismo de la muerte de Perón, momento en el cual el ministro y consejero blanqueó su condición de protagonista estelar, desdibujando el papel de los peronistas históricos. Agreguemos a esto que en diciembre de 1974 los sindicalistas recibieron con estupor el anuncio de la repatriación de los restos de Evita, en una operación ejecutada íntegramente por López Rega. Este hecho ilustra cómo López Rega y su séquito iban apropiándose de la simbología peronista para dotarse de una legitimidad que, en rigor, razonaban los sindicalistas, les pertenecía sólo a ellos. La desconfianza era, sin embargo, recíproca, pues a lo largo del exilio Isabel y López Rega habían sido testigos privilegiados de las hesitaciones de los sindicalistas. En otro orden, López Rega nunca había ocultado su ambición por controlar los fondos de las poderosas obras sociales sindicales. Ahora bien, pese a las tensiones iniciales, los gremialistas, de la mano de las 62 Organizaciones conducidas por Lorenzo Miguel, se encargaron de dar claras muestras de lealtad al gobierno de “la Señora”.

Mientras tanto, durante 1975 la situación económica continuó degradándose. El ministro Gómez Morales, luego de arduas negociaciones con los sindicatos, estableció un incremento salarial del 38% para hacer frente a la devaluación y la suba de los precios. Sin embargo, el aumento no fue convalidado y Gómez Morales terminó siendo reemplazado por Celestino Rodrigo, conspicuo miembro del entorno presidencial. Pese a su brevedad, la gestión de Rodrigo marcó una fuerte inflexión. En efecto, éste aplicó drásticas medidas de ajuste

que implicaron una devaluación del 100% y un aumento brutal de las tarifas de los principales servicios públicos que, en algunos casos, llegó al 200%.

El plan económico impulsado por Rodrigo era sumamente ambicioso pues implicaba una reorientación económica fundamental que ponía fin a la política económica nacionalista y reformista, característica del peronismo, para dar paso a una política de estabilización y ajuste. El giro radical operado en la economía traducía el esfuerzo del círculo lopezreguista por concretar una nueva alianza con los poderosos grupos económicos, excluyendo a los grandes sindicatos de la CGT. A fin de garantizar su respaldo, López Rega y la presidenta se habían acercado también a las jerarquías militares.

El Rodrigazo, suerte de primer golpe hiperinflacionario en la historia del país, no pudo menos que provocar una sorpresa generalizada en la opinión pública. Por su parte, desconcertados tanto por la rapidez como por el carácter drástico de las decisiones, los líderes sindicales se encargaron de denunciar que el plan propuesto era ajeno al modelo de la concertación social que pregona la tradición peronista, al tiempo que iniciaron las tratativas habituales para obtener un reajuste salarial. Luego de varios forcejeos, obtuvieron un aumento medio del 160%. El 24 de junio, Lorenzo Miguel convocó a los trabajadores metalúrgicos a una concentración en Plaza de Mayo. Con el motivo aparente de “agradecer” a la presidenta el aumento, su fin no era otro que obligar a ésta a la homologación de las paritarias. Sin embargo, rumores posteriores comenzaron a poner en cuestión la convalidación del aumento. El estado de tensión e incertidumbre se prolongó unas semanas, pese a que el 27 de junio la CGT realizó el llamado a una gran marcha en contra del ajuste. Sin embargo, la reacción espontánea de las bases desbordó las estructuras sindicales y, frente a un país paralizado, la CGT resolvió cruzar el Rubicón y convocó así a un paro general de 48 horas, para el 7 y el 8 de julio. Nunca antes la CGT había decretado una huelga general con un gobierno peronista.

La multitud reunida en Plaza de Mayo pidió las cabezas de Rodrigo y de López Rega. Obligado a dimitir, López Rega, ministro récord del período, con 768 días en el poder, partió rumbo al exterior, en misión diplomática. Recién el 20 de di-



Personal bancario se moviliza durante el Rodrigazo, 2-7-1975.

ciembre de 1975 el gobierno pediría su captura internacional. Finalmente López Rega regresaría al país el 13 de marzo de 1986, luego de ser detenido por el FBI en el aeropuerto de Miami. Moriría en la cárcel, antes de que se dictara la sentencia judicial en su contra.

Volviendo al teatro de los hechos, recordemos que, pese a que los sindicalistas habían buscado eludir la confrontación con el gobierno de Isabel, ésta finalmente se tornó insoslayable. En su afán por mantener la lealtad aun en medio del cuestionamiento, los sindicalistas articularían una versión atenuada de la teoría del cerco: “La señora —dirían entonces— está mal aconsejada”...

Después de la renuncia de López Rega, el gobierno de Isabel buscó apoyarse en la ortodoxia sindical y el peronismo político. Pero en medio del agravamiento de la situación económica y de la escalada de violencia política, continuaría por poco tiempo más su marcha errática. Así, el modelo nacional-popular naufragaba, no sólo devorado por el agravamiento de las

constricciones externas sino, sobre todo, a raíz de las luchas que se habían desatado en el interior del movimiento. Fracturadas las alianzas sociales que lo habían hecho posible, carente de un liderazgo que asegurara su rehabilitación, la suerte parecía estar definitivamente sellada. Pronto, la soledad de Isabel evidenciaría el vacío de poder. La escena se aprestaba a ser ocupada por otros actores.

De la deriva de las organizaciones armadas al terrorismo militar

El país iba desliziéndose cada vez más por una pendiente incontrolable de violencia, de la cual eran responsables los grupos de extrema derecha, activados desde el gobierno, así como las agrupaciones armadas de izquierda. Las estadísticas muestran que sólo durante el año 1975 la cantidad de asesinatos políticos, debido tanto a la represión ilegal como a la violencia guerrillera, alcanzó la cifra de 860 personas.

Desde la izquierda, una de las características del período es que las principales organizaciones armadas, ERP y Montoneros, fueron subordinando la estrategia política a la lógica militar. Tanto la significativa reducción del espacio de la política institucional como la primacía de una lógica militarista tuvieron graves consecuencias, pues crearon nuevas oportunidades para el regreso y la religitimación de las Fuerzas Armadas.

Quizá donde este proceso de militarización se expresa con mayor nitidez es en Montoneros, que se había convertido en un breve lapso en una de las organizaciones de masas más poderosas del continente. Una vez consumada la ruptura con el gobierno peronista, la agrupación incrementó sus acciones armadas mediante secuestros extorsivos (como el de los hermanos Born, realizado en septiembre de 1974, que reportaría la cifra de 64 millones de dólares), así como a través de la eliminación física de sus enemigos políticos. En suma, Montoneros fue produciendo estructuras de organización con características de ejército regular (compañías, pelotones), de manera que, una vez establecida la prioridad de estos aparatos, el compromiso obligaba a sus seguidores, por encima de sus niveles iniciales de compromiso, a convertirse en milicianos. Por último, en

septiembre de 1975, en un gesto político inusual, la cúpula de Montoneros decidió su autoproscricción del marco de la legalidad, anunciando su voluntario pase a la clandestinidad. Poco después, la organización fue declarada ilegal por el gobierno constitucional de Isabel Perón.

La política de superficie del ERP fue considerablemente menos intensa que la de Montoneros, pese a que en el campo político contaba con el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS) y en el gremial con el Movimiento Sindical de Bases (MSB), al tiempo que realizaba una labor progandística a través de periódicos como *Estrella Roja*, *Nuevo Hombre* y también a través del diario *El Mundo*. Liderado por el mítico guerrillero Mario Roberto Santucho, el ERP planteaba la “guerra social revolucionaria” en dos frentes. Por un lado, desde 1974 sus acciones militares apuntaban directamente al Ejército. Ya



Jorge Born durante su secuestro por Montoneros.

hemos consignado que en enero de 1974 el ERP dispuso el ataque a la guarnición militar de Azul, hecho que tuvo importantes consecuencias políticas. La acción militar tenía tanto el propósito de conseguir armamento para la guerrilla rural como el de probar a los trabajadores la capacidad de la organización para liderar la guerra revolucionaria.

Por último, el ataque también se proponía provocar al gobierno, a fin de generar en éste una respuesta que pusiera al descubierto la verdadera naturaleza represiva del régimen peronista como defensor de las Fuerzas Armadas. Tal como esperaba Santucho, el gesto realizado por Perón abrió la puerta para una reconciliación con el Ejército argentino, al tiempo que privó a la izquierda de un aliado importante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, quien mantenía fluidos vínculos con la Tendencia. En definitiva, por la vía armada, el objetivo del ERP apuntaba a la agudización y del estallido de las contradicciones existentes en diferentes contextos y escenas. Las consecuencias de esta orientación dieron cuenta de una creciente y rápida unidimensionalización de las escenas, en provecho de una lógica militar, situación que no tardaría en verse multiplicada en una serie incontrolada de efectos perversos.

Fue también en 1974 que el ERP decidió abrir un frente de guerrilla rural en la provincia de Tucumán. A raíz de ello, en mayo de 1975, el Poder Ejecutivo ordenó por decreto la intervención del Ejército en esa provincia, con el fin de “neutralizar y/o aniquilar” a las fuerzas guerrilleras que allí actuaban. Esta intervención militar tuvo como eje la represión clandestina, que pronto comenzó a cobrar las siniestras formas de la desaparición y la tortura, tácticas inspiradas en los manuales de contrainsurgencia difundidos por el Departamento de Estado norteamericano. La conducción del ERP respondió a esta estrategia de represión clandestina exigiendo el trato de un ejército enemigo, de acuerdo con las convenciones internacionales. Así, con el propósito de forzar a las Fuerzas Armadas al respeto de las reglas bélicas internacionales, el ERP inició una política de represalia, adoptando la determinación de no tomar prisioneros vivos hasta tanto el Ejército no lo hiciera. Sin embargo, en diciembre de ese año, luego del asesinato accidental de una niña, abandonó dicha política. Ese mismo mes de 1975,

en un vasto operativo, el ERP llevó a cabo el intento de copamiento del regimiento de Monte Chingolo, que culminó en el aniquilamiento de gran parte de las fuerzas guerrilleras intervinientes.

Por otro lado, las acciones cada vez más espectaculares de la guerrilla urbana, progresivamente orientadas contra las fuerzas militares, así como la emergencia de un foco de guerrilla rural en Tucumán, brindaron la posibilidad que el Ejército buscaba desde hacía un tiempo: recuperar su papel como salvador de la Patria y aplicar de manera discrecional las tácticas de contrainsurgencia. Así, la ejecución del Operativo Independencia tuvo por eje una estrategia de propaganda y de información destinada a la opinión pública, en la cual se distorsionaba deliberadamente el número de enfrentamientos, las bajas y los guerrilleros involucrados. Comandado por el general Acdel Vilas primero, luego por el general Antonio D. Bussi, el Ejército argentino desembarcó con un contingente estimado en unos 4.000 hombres, a fin de derrotar “en una guerra” a un ejército guerrillero que apenas si llegó a contar con 160 milicianos.

A esto hay que agregar que el poder decisorio de las Fuerzas Armadas se vio acrecentado en la última etapa del debilitado gobierno de Isabel, caracterizada por un creciente vacío de poder, pese al apoyo del sindicalismo ortodoxo.

El golpe de Estado llegaría el 24 de marzo de 1976. Después de esa fecha nada sería como antes. Se abría así un período completamente nuevo y uno de los más nefastos de la historia argentina, en el cual la represión política y el terror casi demencial irían acompañados por una fuerte reorientación económica. Sus consecuencias multiformes se harían visibles en la década siguiente, tanto a nivel de la estructura social como en la conciencia política de los argentinos.

El *ethos* de los setenta

En nuestro país, gran parte de los militantes políticos ingresaron a la política entre 1959 y 1969, esto es, al amparo de la Revolución Cubana y al calor de la movilización iniciada por el Cordobazo. En sólo diez años el horizonte de los posibles históricos pareció ampliarse aceleradamente. En ese contexto,

la violencia se fue dotando de una eficacia mayor, pues ya no emergía como algo eventual, ritualizado en el activismo o en las “riñas” entre patotas sindicales, sino como el eje de una práctica organizada y sistemática para la toma del poder. Más aún, bajo un régimen autoritario y represivo, la violencia aparecía cargada con un suplemento de legitimidad. Era la “violencia desde abajo”, una respuesta a la “violencia de Estado”. En otros términos, la posibilidad del *cambio revolucionario* formaba parte del sentido común de importantes sectores progresistas de la sociedad argentina.

Pero había también otras formas de acción y movilización que se articulaban con la afirmación de la necesidad del cambio revolucionario: las manifestaciones, las pintadas, la acción barrial, la militancia en las villas. Combinados, estos repertorios de acción fueron definiendo los marcos sociales y culturales a partir de los cuales toda una nueva generación de militantes se dotó de una identidad política.

El *ethos* de los '70 se caracterizó entonces por la desconfianza en las vías reformistas y el desprecio por el sistema partidocrático, en suma, por el compromiso revolucionario. Su encarnación más acabada fue la figura del militante político, definido por una “mística” revolucionaria, vale decir, por un compromiso que se postulaba como permanente y radical.

Ahora bien, en términos de militancia, el *ethos* de los '70 tuvo dos inflexiones mayores. La primera, específicamente “movimientista”, fue ilustrada por el multifacético frente bautizado con el nombre de la Tendencia, conducido por Montoneros; frente que, como hemos visto, desbordaba ampliamente el marco propio del sistema democrático-populista y amenazaba la estabilidad del régimen recién instaurado. Nada ejemplifica mejor este talante movimientista que las “tomas” realizadas durante la corta primavera camporista, época en la cual coincidieron *el máximo grado de movilización con la máxima aspiración al cambio*.

La segunda inflexión, propiamente “militarista”, fue encarnada, de manera paradigmática, por la organización Montoneros. Lo peculiar de esta lógica de acción “militar” no es que suponía la exclusión del adversario, sino más bien que fue alimentada por una determinada concepción y práctica de la política, asentada ella misma sobre una interpretación específica

de la historia argentina. Esta lectura afirmaba la existencia de dos líneas antagónicas que recorrían la historia argentina, cristalizadas durante largo tiempo por la oposición peronismo/antiperonismo. La continuidad de la historia desde la época de la fundación de la república moderna aparecía como un hilo conductor, por lo cual cada etapa, cada lucha, encontraba su superación dialéctica en momentos posteriores. Pero, sobre todo, la lucha, a medida que se hacía más violenta, iba desnudando a los verdaderos protagonistas al tiempo que implicaba una mejor visualización de los objetivos. Por otro lado, este dispositivo binario fue potenciado por la visión marxista de la época, como lo muestra la tesis de la agudización de las contradicciones. Finalmente, a medida que los actores políticos ligados a la Tendencia eran marginados de la escena política por el propio Perón, o sus militantes asesinados por comandos de extrema derecha, la conducción de Montoneros iba profundizando las implicaciones de este dispositivo binario. La violencia, definida como necesaria, vista como irreductible, alcanzaría entonces momentos de verdadero paroxismo.

Por otra parte, el progresivo enclaustramiento de Montoneros en una lógica terrorista no hizo sino acentuar su alejamiento de aquellas masas que decía representar. El recorrido posterior de la organización, sobrevenida con el exilio de sus líderes máximos, sus sucesivas escisiones, su contraofensiva suicida, sus delirios mesiánicos, confirmaría de manera especialmente sórdida y patética los efectos perversos de esta lógica de acción.

Pero, de manera ejemplar, este dispositivo ideológico binario también subyacía en las consignas políticas de la época, las que pasaron a ocupar un lugar fundamental en la contracultura de los setenta. El hecho no es casual, pues las consignas tenían la capacidad de articular en unas pocas ideas-fuerza las ofertas ideológicas del período, al tiempo que podían expresarlas en la forma de oposiciones irreductibles o de enunciados dicotómicos. De esta manera, cuestiones referidas a la “liberación nacional”, la “revolución”, el “socialismo”, la “dependencia”, la construcción del “hombre nuevo”, fueron nutriendo los ejes de cualquier discusión ideológica, facilitando el rápido desliz hacia una lógica lineal y el reduccionismo político.

Sin embargo, por encima de la existencia de un dispositivo

binario poderosamente reductor, la deriva militarista en la que incurrieron las dos máximas organizaciones guerrilleras, Montoneros y ERP, no puede ni debe ser asimilada a la lógica del terror militar instituido desde el Estado. Así, nada más falso que la hipótesis de “los dos demonios”, tan difundida durante los años '80. Una vez más, hay que subrayar el rol que cumplió la “guerra” desarrollada contra las huestes del ERP en Tucumán. Apelando al recurso del sobredimensionamiento del enemigo, la “guerra” fue efectivamente inventada, convertida en un laboratorio que pondría a prueba el modelo represivo, basado en la detención, el secuestro ilegal, la tortura y la desaparición. Los primeros campos clandestinos de detención fueron creados en Tucumán, en el contexto de la guerra contra la guerrilla, la que a fines de 1975 ya estaba militarmente derrotada. Así, el modelo no sólo sorteó exitosamente el ensayo de laboratorio, sino que, una vez desplazado el débil gobierno de Isabel Perón, se hizo susceptible de una generalización inmediata desde el control absoluto de los resortes del Estado.

Por otro lado, el pasaje de la dimensión movimientista a su inflexión militarista no puede comprenderse sin referencia a la guerra que se libraba en el interior de las diferentes escenas del poder: las sucesivas purgas internas, el incremento de la violencia, en fin, la represión desmedida y el caos económico que envolvieron el período que va de 1973 a 1976, contribuyeron a multiplicar tanto el desencanto como el creciente temor, obligando a vastos sectores anteriormente movilizados al repliegue y la desertión. La fase isabelina del gobierno señala sin duda la gran decepción, así como anticipa el terror militar. Lejos estamos ya de aquella época en la cual un porcentaje importante de la población justificaba la violencia de la guerrilla como herramienta legítima frente a un régimen autoritario. Lejos también del lenguaje triunfalista que acompañó las masivas manifestaciones, antes y durante la primavera camporista. Lejos del fervor revolucionario que proyectó la articulación de una parte de las clases medias movilizadas con las clases trabajadoras peronistas.

Finalmente, nada sería más errado que intentar reducir el *ethos* de los '70 a través de su sola faz oscura o buscar comprenderlo desde la perspectiva ideológica de otras épocas, como han pretendido hacer ciertos ensayos que cuestionan el

déficit político de los '70 desde posiciones que asumen la defensa del régimen democrático, revalorizado a partir de los '80. Sólo la comprensión y, a la vez, el distanciamiento crítico pueden devolvernos las claves de una época que está menos marcada por el déficit político y más, mucho más, por la creencia en el cambio, a la vez que por la afirmación de la violencia como herramienta de lucha y transformación social. Más simple, una época caracterizada por el exceso de pasión política.

Agradezco la minuciosa lectura crítica realizada por Eduardo Anguita, Cristina García, Claudia Lozano y Fernanda Salgado. Asimismo deseo agradecer la generosidad de Roberto Baschetti, quien puso a mi disposición su vasta colección de documentos y libros sobre la época. Nuestra inspiración inicial se nutrió de un artículo, escrito tempranamente en 1979 por J. C. Portantiero, titulado "De la crisis del país popular a la reorganización del país burgués".

BIBLIOGRAFÍA

Anguita, Eduardo, y Caparros, Martín, *La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, 1973-1976*, vol. II, Buenos Aires, Norma, 1997.

Anzorena, Oscar R., *Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía al golpe de Videla*, Buenos Aires, Ed. del Pensamiento Nacional, 1998.

Baschetti, Roberto (comp.), *Documentos, 1973-1976*, 2 vol., Buenos Aires, Ed. de la Campana, 1999.

Bonasso, Miguel, *El presidente que no fue*, Buenos Aires, Planeta, 1997.

Diario *La Opinión*, 1974.

Di Tella, Guido, *Perón-Perón, 1973-1976*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1983.

Gillespie, Richard, *Soldados de Perón. Los Montoneros*, Buenos Aires, Grijalbo, 1982.

James, Daniel, *Resistencia e integración*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

Martuccelli, Darío, y Svampa, Maristella, *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada, 1997.

Nievas, Flavián. "Cámpora: primavera-otoño. Las tomas", en Pucciarelli, Alfredo (ed.), *La primacía de la política*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 351-393, 1999.

Perón, Juan Domingo, *1974: Discursos completos*, 4 vol., Buenos Aires, Megafón, 1988.

———, *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder*, Buenos Aires, Pevuel, s. f.

———, *Conducción política*, Buenos Aires, Freeland, 1971.

———, *Tercera posición y unidad latinoamericana*, Buenos Aires, Biblos, 1985.

Portantiero, Juan Carlos, "De la crisis del país popular a la reorganización del país burgués", en *Cuadernos en marcha. Argentina, la gran frustración*, segunda época, año 1, N° 2, México, 1979.

Riz, Liliana de, *La política en suspenso, 1966-1976*, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Rouquié, Alain, "Hegemonía militar, Estado y dominación social", en Rouquié, Alain (comp.), *Argentina hoy*, México, Siglo XXI, 1982.

Seoane, María, *Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho*, Buenos Aires, Planeta, 1992.

Sigal, Silvia, y Verón, Eliseo, *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*, Buenos Aires, Legasa, 1986.

Todo es Historia, Veinte años, Anuario, N° 240, 1987.

———, *El Brujo*, N° 375, 1998.

———, *Cultura y Sociedad en los '60*, N° 280, 1990.

Torre, Juan Carlos, *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, Buenos Aires, CEAL, 1989.

Torti, María Cristina, "Protesta social y 'Nueva Izquierda' en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional", en Pucciarelli, Alfredo (ed.), *La primacía de la política*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 205- 231, 1999.

Verbitsky, Horacio, *Ezeiza*, Buenos Aires, Contrapunto, 1986.

Vincens, L., *Lopezreguismo y justicialismo*, Buenos Aires, El Cid, 1983.